

Universidad de Huánuco

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

APLICACIÓN DE LA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PRIVATIVA DE
LA LIBERTAD A LOS ADOLESCENTES INFRACTORES EN
LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN EL DISTRITO
JUDICIAL DE VENTANILLA - 2016.

**Para optar el Título Profesional de
ABOGADO**

TESISTA

AGUILAR CONTRERAS, Luisa Saory

ASESORA

Mtra. PRECIADO MORAN, Ada Luz

Huánuco - Perú
2019



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Ciclo de Asesoramiento para la Tesis Profesional



RESOLUCIÓN N° 1046-2018-DFD-UDH
Huánuco, 17 de diciembre de 2018.

Visto la Resolución N° 375-2018-DFD-UDH de fecha 24 de agosto de 2018 que declara **APROBAR** el Proyecto de Investigación intitulado **“APLICACIÓN DE LA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD A LOS ADOLESCENTES INFRACTORES EN LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE VENTANILLA - 2016”**, presentado por la Bachiller **“Luisa Saory AGUILAR CONTRERAS**;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 14° numeral 1 del Reglamento de Grados y Títulos del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas vigente para el caso determina las diversas modalidades al cual el Graduando puede acogerse para obtener el Título Profesional de Abogado.

Que, mediante Resolución N°587-2015-R-CU-UDH de fecha 29 de mayo de año 2015 se aprobó el ciclo de Asesoramiento para la tesis profesional- CATP/DERECHO del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas, en atención al Art. 31 del Reglamento General de Grados y Títulos de la UDH;

Que, mediante Informe Final de fecha 31 de agosto de 2018, el Mg. Ada Luz Preciado Moran Asesor del Proyecto de Investigación **“APLICACIÓN DE LA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD A LOS ADOLESCENTES INFRACTORES EN LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE VENTANILLA - 2016”**, aprueba el informe final de la Investigación;

Que, en cumplimiento al Art. 31 del Reglamento de Grados y Títulos del Programa Académico de Derecho y CC.PP vigente para el caso y a mérito del documento de visto y habiendo la Bachiller previamente presentado los tres ejemplares de la referida Tesis debidamente espiralados, es pertinente emitir la Resolución de Jurado y señalar fecha y hora para su Sustentación;

Estando a lo dispuesto en el Art. 44° de la Nueva Ley Universitaria N° 30220; Inc. n) del Art. 44° del Estatuto de la Universidad de Huánuco; Reglamento de Grados y Títulos aprobado con Resolución N° 466-2016-R-CU-UDH del 23 de mayo de 2016 y la facultad que indique;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al Jurado Calificador para examinar a la Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, doña **Luisa Saory AGUILAR CONTRERAS**, para obtener el Título Profesional de **ABOGADA** por la modalidad de Trabajo de Investigación Científica (Tesis), llevado a cabo en el Ciclo de Asesoramiento para la Tesis profesional; a los siguientes docentes:

Dr. Carlos A. Hinojosa Uchofen
Mg. Lesly P. Bravo Meneses
Dr. Hugo Romero Delgado

: Presidente
: Secretario
: Vocal



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Ciclo de Asesoramiento para la Tesis Profesional



RESOLUCIÓN N° 1046-2018-DFD-UDH
Huánuco, 17 de diciembre de 2018.

Artículo Segundo.- Señalar fecha de sustentación el día viernes 21 de diciembre del 2018 a horas 12:00 p.m. en el aula N° 01 3er piso, sito en el Jr. Domingo Casanova N° 148 Lima – Lince, sede de la Universidad de Huánuco.

Artículo Tercero.- Difúndase publicando e invitando a la comunidad académica para que presencian dicha sustentación.

Regístrese, comuníquese y archívese.



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Dr FERNANDO GARCINO BARRUETA
DECANO

DISTRIBUCIÓN: Vice. Rect. Académico , Fac. Derecho, Of. Mat. Y Reg. Acad..f. Exp. Interesado, archivo.
FCB/znn

**ACTA DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN POR LA MODALIDAD DE PRESENTACION
Y SUSTENTACION DE UNA TESIS**

En la ciudad de Lima, siendo las 12:00 horas del día 21 del mes de diciembre del año dos mil dieciocho se reunieron en el Jr. Domingo Casanova N° 148 - LINCE - LIMA los miembros Ratificados del Jurado Examinador, designados por Resolución N° 1046-2018-DFD-UDH del 17 de diciembre de 2018, al amparo de la nueva Ley Universitaria N° 30220 inc "n" del Art. 44 del Estatuto de la Universidad de Huánuco, Reglamento de Grados y Títulos, para proceder por la modalidad de Presentación y Sustentación de una Tesis de la Graduada **Luisa Saory AGUILAR CONTRERAS** la postulante al Título de Abogada, procedió a la exposición de la Tesis, absolviendo las interrogantes que le fueron formuladas por los miembros designados del Jurado, de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias; realizado el exposición, el Jurado procedió a la calificación.

JURADOS CALIFICADORES

PUNTAJE

Dr. Carlos A. Hinojosa Uchofen	Presidente	<u>13</u>
Abg. Lesly P. Bravo Meneses	Secretaria	<u>13</u>
Dr. Hugo Romero Delgado	Vocal	<u>13</u>

CALIFICATIVO :

13
En números

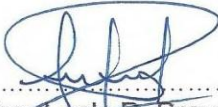
TRECE
En letras


RESULTADO :


APROBADO

por

UNANIMIDAD


Abg. Lesly P. Bravo Meneses
Secretaria


Dr. Carlos A. Hinojosa Uchofen
Presidente


Dr. Hugo Romero Delgado
Vocal

DEDICATORIA:

A Dios y a las personas que hacen
de mí un mejor ser humano.

AGRADECIMIENTO:

A mi familia, a la Universidad de Huánuco, a los profesionales especialistas en la materia por compartir sus experiencias sobre el tema y al personal de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla por permitirme acceder a la información.

ÍNDICE

DDEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO	III
RESUMEN	VI
ABSTRACT	VIII
INTRODUCCION	X

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.	Descripción del problema	12
1.2.	Formulación del problema	14
1.3.	Objetivo general	15
1.4.	Objetivos específicos	15
1.5.	Justificación de la investigación	16
1.6.	Limitaciones de la investigación	17
1.7.	Viabilidad de la investigación	17

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1.	Antecedentes de la investigación	18
2.2.	Bases teóricas	26
2.3.	Definiciones conceptuales	58
2.4.	Hipótesis	74
2.5.	Variables	75
2.5.1.	Variable independiente (x)	75
2.5.2.	Variable dependiente (y)	76
2.6.	Operacionalización de las variables	76

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.	Tipo de investigación	77
3.2.	Alcance o nivel	77
3.3.	Diseño	77
3.4.	Población y muestra	77
3.5.	Técnicas e instrumentos de investigación	78
3.6.	Técnicas para el procesamiento y análisis de la información	78
3.7.	Criterios de inclusión	78
3.8.	Criterios de exclusión	79

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1.	Procesamiento de datos	80
4.2.	Contrastación de hipótesis	98

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1.	Contrastación de los resultados	101
	Conclusiones	104
	Recomendaciones	106
	Referencias bibliográficas	110
	Anexos	119

RESUMEN

La presente investigación identifica y analiza la normatividad que aplican los magistrados al imponer la medida socio educativa privativa de libertad a los adolescentes que infraccionan la ley penal en los delitos contra el patrimonio, aborda la problemática social desde la perspectiva garantista en contraposición al modelo retributivo, considerando el sistema de protección integral en salvaguarda de los derechos de los menores; el Estado Peruano considera la capacidad jurídica y progresiva de las personas menores de edad, a mayor autonomía del menor se disminuye la dependencia de los padres reflejado en el sistema de justicia que enuncia en el respeto de los derechos consagrados en las normas nacionales e internacionales, especialmente al tiempo del desarrollo del proceso de investigación, juzgamiento e internamiento, es así que la medida socio educativa es aplicada considerando por el menor plazo posible a fin de reinsertar a la persona menor de edad dentro de la sociedad.

En el capítulo uno se desarrolla el problema de investigación y los objetivos que se pretendió alcanzar en el desarrollo de la investigación; en el capítulo dos se considera el marco teórico, los antecedentes de la investigación y bases teóricas relacionada al modelo garantista, los principios y garantías que se consideran en el desarrollo del procesamiento por infracciones contra el patrimonio; en el tercer capítulo se desarrolla la metodología que usa la investigación, enfoque cualitativo, alcance descriptivo y diseño no experimental de las diferentes características, aspectos y dimensiones del objeto de la presente investigación; en el capítulo cuatro se analizan los resultados obtenidos en base a estadística inferencial y descriptiva, en el quinto capítulo se plantea la discusión de los resultados.

El material presentado en este trabajo de investigación ha sido preparado por la investigadora y constituye una recopilación de información para la tesis; todas las fuentes se encuentran debidamente citadas en las referencias bibliográficas, hemerográficas y electrónicas, así como en las diferentes notas al pie de este documento, la investigadora no se atribuye los derechos de autor de las fuentes consultadas.

PALABRAS CLAVES:

Medida socioeducativa, adolescente infractor, acto infractor, internamiento, interés superior del niño, delitos contra el patrimonio, excepcionalidad

ABSTRACT

The present investigation identifies and analyzes the norms that the magistrates apply when imposing the socio-educational measure deprivation of liberty to the adolescents who violate the penal law in the crimes against the patrimony, approaches the social problematic from the guarantee perspective as opposed to the retributive model, considering the system of integral protection in safeguarding the rights enshrined in national and international norms, especially during the development of the process of investigation, judgment and internment, it is thus the socio-educational measure is applied considering for the shortest possible term in order to reinsert the minor into the society.

In chapter one, the research problem and the objectives that are intended to be achieved during the investigation are developed; in chapter two the theoretical framework, the background of the research and theoretical bases related to the guarantee model, the principles and guarantees that are considered in the development of the process for infringements against the patrimony are considered; in the third chapter the methodology that uses the research, qualitative approach, descriptive scope and non-experimental designed of the different characteristics, aspects and dimensions of the object of the present investigation is developed; in chapter four the results obtained are analyzed based on inferential and descriptive statistics, in the fifth chapter the discussion of the results is presented.

The material presented in this research work has been prepared by the researcher and constitutes a compilation for the thesis; all the sources are duly quoted in the bibliographic, hemerographic and electronic references, as

well as in the different footnotes of this document, the researcher does not attribute the rights of the consulted sources.

KEYWORDS:

Socio-educational measure, delinquent adolescent, infringing act, internment, higher interest of the child, crimes against the heritage, exceptionality.

INTRODUCCIÓN

Se presenta la investigación denominada la aplicación de la medida socioeducativa privativa de la libertad a los adolescentes infractores en los delitos contra el patrimonio en el Distrito Judicial de Ventanilla - D.J. Ventanilla en el lapso de tiempo del 2016, cuyo objetivo fue identificar y analizar la normatividad aplicada por los magistrados al recorrer el desarrollo del proceso, argumentos que fundamentan la emisión de una resolución de sentencia condenatoria que resuelve la privación de la libertad del adolescente que infringe la ley penal, así como la incidencia de infracción contra el Patrimonio registrada en Ventanilla.

El Perú ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño considerando a la persona menor de edad como sujeto de derechos y garantías específicas e inalienables, nuestro país presenta un sistema de justicia especializado, distinguiendo un marco instrumental nacional e internacional para la protección de adolescentes que infringen la ley. El Comité de los Derechos del Niño en la Observación General N° 10 numeral 71 indica que la medida socio educativa privativa de la libertad debe ser proporcional a las circunstancias, la gravedad del acto, la edad y las necesidades del menor, así como a las necesidades sociales.

El acto infractor generalmente se da a conocer mediante denuncia verbal o escrita presentada en la Comisaría del sector por la parte que se considera agraviada, la Policía dentro del plazo legal comunica al representante del Ministerio Público el resultado de la investigación mediante un informe policial que señalan las acciones adoptadas preliminarmente respecto de la noticia criminal; la Fiscalía procederá a realizar una

investigación en el plazo legalmente establecido una vez concluido se requiere la apertura de proceso por infracción a la ley penal ante el Poder Judicial; el Juzgado de acuerdo a su competencia material y funcional desarrolla el proceso la misma que al concluir determina la existencia o no de responsabilidad penal del menor de edad, de ser afirmativa aplica una medida socioeducativa caso contrario la absolución del menor investigado.

Es necesario considerar que las medidas socioeducativas tienen como finalidad rehabilitar y educar al adolescente infractor, buscando su bienestar por medio del aprendizaje significativo que lo ayude a asumir y cumplir un rol positivo como miembro de la sociedad para que contribuya al desarrollo de esta, en oposición a la estigmatización que muchas veces se manifiesta como muestra de desconfianza, discriminación y persecución por la infracción perpetrada.

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el decurso de los últimos años se ha registrado un incremento significativo de menores de edad infractores a la ley penal, según la legislación peruana pueden ser delitos, faltas o contravenciones, es así que el diario El Comercio (Febrero 2017) redactó que hacia finales del año 2015 en el Perú había 3'256 menores de edad infractores de la norma penal, el año 2016 había 3'632 adolescentes que recibían tratamiento de rehabilitación por mandato de los jueces, para el año 2017 el número aumentó en 376, equivalente al 11,5%, de los cuales 1'057 adolescentes infractores se encuentran dentro de un Centro de Rehabilitación Juvenil "Maranguita", Santa Margarita y el Anexo III del penal de Ancón; esta información es corroborada con la que brinda el INEI (2016) señalando que en el Distrito de Ventanilla a la fecha de estudio contaba con 372 mil 899 habitantes de este total el 28.4% era una población menor de 15 años, población infantil de 0 a 14 años es 105 973 habitantes y población joven de 15 a 29 años era 98 304 habitantes, el Plan Local de Seguridad Ciudadana (2017) elaborado por la Gerencia de Seguridad de Ventanilla en el 2016 registraba una población aproximada de 20 mil púberes y adolescentes; asimismo, el Boletín Estadístico (Diciembre 2017) Ministerio Público Distrito Fiscal de Ventanilla registra en materia de familia penal un total de 12 casos atendidos por actos que infraccionaron la ley penal en el año 2016.

La doctrina de protección integral que expone que los niños y adolescentes poseen necesidades diferentes al de los adultos debido a su desarrollo psíquico y físico aún en evolución, la Real Academia de la Lengua Española (2018) considera que la adolescencia es el periodo de la vida humana que sigue a la niñez y precede a la juventud entre la aparición de la pubertad y el comienzo de la adultez reconocidos como sujetos pleno de derechos; existe evidencia que el desarrollo de las edades promedio está relacionado en un alto índice en la comisión de algunos delitos siendo que algunos jóvenes tienden a estar más activamente involucrados en actividades delictivas, las poblaciones jóvenes muestran una tasa alta de criminalidad y están más propensos a perpetrar delitos; el profesor Rojas Vargas, F. (2015) manifiesta que los menores que tienen conflicto con la ley penal por lo general pertenecen a sectores sociales en desventaja o discriminados, encontrándose en situación de especial vulnerabilidad porque no pueden satisfacer materialmente sus necesidades básicas es en estas circunstancias incurren en infracciones contra el patrimonio la misma que registra mayor frecuencia de denuncias, vulnerando la propiedad (todo bien que tenga un contenido económico) de las personas naturales o jurídicas, la comisión de este tipo de infracciones en forma general puede ser definida como comportamiento humano que lesiona o pone en peligro intereses económicos del sujeto pasivo, en su construcción interviene diferentes instituciones de estricta creación del derecho privado, abarca el hurto, robo, estafa, receptación, apropiación ilícita, defraudación, extorsión, usurpación y daños.

Ante la necesidad de disponer de sanciones frente a un hecho punible consumado por un adolescente el Estado estableció las medidas socioeducativas, asignando a los operadores de justicia la tarea de analizar la comisión del hecho infractor y las características personales del menor infractor, si bien en conjunto tiene una finalidad

educativa-tutelar también debe formar convicción en el adolescente que ha realizado la conducta lesiva a los valores éticos socio jurídicos. Los principio de excepcionalidad, proporcionalidad, el grado de responsabilidad, la gravedad del hecho imputado al menor fundamentan la sanción privativa de la libertad valorando la afectación del bien jurídico, analizando la duración de la medida en función de la escala temporal vivida por el adolescente, en respuesta a esta situación se desarrollaron distintos modelos de control de las conductas realizadas por los adolescentes que incumplen la ley penal, actualmente el criterio generalizado para dar la noción del fenómeno infractor basada en dos elementos: que un menor incurre en un acto considerado como delito y la minoría de edad de la persona sujeta de derecho esto enmarcado en la justicia garantista de carácter diferenciado y especializado.

La presente investigación analiza las causas que determinan aplicar la medida socioeducativa de internamiento de los adolescentes que realizan infracciones contra el patrimonio en Ventanilla, teniendo como guía lo establecido en la Carta Magna del Perú y la normativa nacional e internacional, aplicación e interpretación de las garantías, principios principalmente el interés superior del niño y adolescente antes que la estigmatización por su conducta.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. PROBLEMA GENERAL

¿Cuáles son las causas que motivan la aplicación de la medida socio educativo privativo de la libertad a los adolescentes infractores contra el patrimonio? Caso concreto del Distrito Judicial de Ventanilla en el año 2016.

1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO

PE 1: ¿Cuáles son las normas que utilizan los magistrados para fundamentar y motivar la medida socio educativa de internamiento?

PE 2: ¿Cuáles son los requisitos para aplicar la medida socioeducativa de internamiento?

PE 3: ¿Cuál es la relevancia cuantitativa de las infracciones contra el patrimonio en los juzgados del Distrito durante el periodo 2016?

PE 4: ¿Cuál es la infracción que tiene mayor incidencia en los juzgados del Distrito durante el periodo 2016?

1.3. OBJETIVO GENERAL

Determinar las causas para aplicar la medida socio educativa privativa de la libertad a los adolescentes infractores contra el patrimonio en el Distrito Judicial de Ventanilla durante el año 2016.

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE 1: Identificar la normativa de aplicación frecuente para fundamentar y motivar la media socioeducativa de internamiento a los adolescentes que infringen la ley penal en el Distrito durante el periodo 2016.

OE 2: Precisar los requisitos para aplicar la medida socioeducativa de internamiento en el Distrito.

OE 3: Señalar la relevancia cuantitativa de las infracciones contra el patrimonio registrados en los juzgados del Distrito durante el periodo 2016.

OE 4: Indicar la infracción contra el patrimonio que registra mayor incidencia en los juzgados del Distrito durante el periodo 2016.

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

La presente investigación encuentra justificación en el carácter científico de la problemática jurídico-social existente, analiza e identifica la dogmática jurídica, normativa y jurisprudencia que aplican los magistrados en los Juzgados de Familia y Mixtos de Ventanilla relacionada con la corriente epistemológica de la Doctrina de Protección Integral del modelo garantista.

1.5.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Exponer la utilidad y aplicabilidad resultante del trabajo de investigación en la atención y tratamiento oportuno de los menores infractores.

1.5.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Aplicación de la ficha de investigación y la entrevista como herramienta metodológica.

1.5.4. JUSTIFICACIÓN LEGAL

Aplicar la normatividad sobre la materia vigente en el Perú cumpliendo los tratados internacionales en post de mejorar el procedimiento de atención legal brindada a los adolescentes internados.

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Las limitaciones están relacionadas a la obtención de información para aplicar las fichas de investigación, lectura de expedientes y la entrevista de acuerdo al tiempo de los magistrados inmersos en el desarrollo de los procesamientos por infracción de la ley penal; la disponibilidad del tiempo de la investigadora no es a dedicación exclusiva por motivos laborales.

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Se consideró las circunstancias y probabilidades de poder llevar a cabo la presente investigación por contar con facilidad para acceder a la información bibliográfica relacionada a la materia de estudio, así como la asesoría de especialistas en el tema de investigación y el costo accesible que implica su realización

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Palomino, J. (2017). Tratamiento de los menores que perpetran infracciones contra la ley penal en el distrito de Chanchamayo – Junín 2014 - 2015. (Tesis para optar al Título Profesional de Abogado), Universidad de Huánuco, Perú, manifiesta que El tratamiento hacia los menores infractores que hacen los magistrados se fundamenta en aspectos puramente normativos haciendo que se evite crear estados de derecho o crea jurisprudencia. Y muestran que tienen un fundamento normativo basado en la legislación especializada del menor. Los menores infractores en su gran mayoría son varones, que mayormente oscilan entre los 15 y 16 años y los mismos tienen una baja condición económica y además en su gran mayoría proceden de familias desintegradas. Son relativamente o medianamente deficientes el desempeño del Magistrado de Familia al momento de establecer las medidas de protección socio educativas para prevenir que un menor de edad no cometa infracciones contra la Ley Penal en la zona judicial de Chanchamayo - Junín, 2014-2015. Los lineamientos de la política criminal referidas a los menores son relativamente eficientes ya que no cuentan recursos logísticos para hacer efectivo un mejor tratamiento para los menores infractores y por lo mismo es relativa en la prevención de conductas infractoras en la zona judicial de Chanchamayo provincia La Merced-Junín.

Peralta, F. & Mogollón, M. (2016). La aplicación de medidas socio educativas de infracción de 6 a 10 años para los menores infractores de la ley penal. (Tesis para optar al Título Profesional de Abogado), Universidad Andina del Cusco, Perú, manifiesta que Concerniente a las normas para los menores infractores de la ley penal, se puede afirmar que: Revisando la normativa del CP, CNA el D.L. 1204 respecto a las sanciones a los adolescentes infractores de la ley penal, podemos decir que las normas son benignas para los adolescentes infractores, lo que no contribuye a la disminución de la infracción a la ley penal consumado por los adolescentes en delitos graves. Una aplicación drástica de las sanciones socio educativas y de igualdad de las sanciones de internación de los adolescentes comprendidos entre 14 a 16 años de edad con los adolescentes infractores comprendidos entre los 16 a 18 años de edad, puede originar prevención general en los adolescentes infractores y de esta forma podemos coadyuvar en la disminución a la infracción de la ley penal. Concerniente a las entrevistas y opiniones recogidas de los Magistrados de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Para nosotros, los Magistrados concuerdan con nuestra hipótesis de que, debe aplicarse las medidas socio educativas drásticas y de internación de 06 a 10 años a adolescentes comprendidos entre 14 a 16 años de edad, para coadyuvar en la disminución de delitos graves consumados por los adolescentes infractores de la ley penal, por ende, resulta viable nuestra intención, sancionándose a los menores comprendidos entre 14 a 16 años de edad por igual. Concerniente a la hipótesis: Es claro que las normas que regulan la conducta de los adolescentes son muy benignas, entonces si proponemos que éstas sean más drásticas los adolescentes infractores de la ley penal ya no querrán infringirlas y de esta forma estaremos disminuyendo la infracción a la ley penal.

Fernández, A. (2013). Tratamiento jurisdiccional y aplicación de medidas socio educativas a menores infractores de la ley penal.

(Tesis para optar al Grado Académico de Magister en Derecho Penal), Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Perú, señala que el artículo 209 del CNA establece que la privación de la libertad preventiva debe ser debidamente motivado: solo puede decretarse cuando exista prueba suficiente¹ (elementos probatorios que vinculen al adolescente como autor o partícipe de la comisión de la infracción), peligro procesal (riesgo razonable de que el adolescente eluda el proceso que se le sigue o el temor fundado de destrucción u obstaculización de las pruebas). A partir de la expedición del decreto legislativo 866 (Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano), se produjo un cambio en la administración y dirección de los centros de internamiento para adolescentes infractores de la ley penal, pues se dispuso la transferencia de las funciones del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF), relacionadas con la rehabilitación de los adolescentes infractores, a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del poder judicial. En la actualidad, la instancia encargada de la atención al adolescente infractor está a cargo de la gerencia de operaciones de centros juveniles del Poder Judicial, que emitió la resolución administrativa 539-CME-PJ, que aprueba el sistema de reinserción social del adolescente infractor. Aunque esta norma fue derogada, en lo sustancial se mantiene este sistema que orienta el tratamiento de los adolescentes privados de la libertad hacia un cambio estructural mediante el empleo de una metodología pedagógica preventiva, que se desarrolla por medio de programas que actúan sobre el adolescente. El estudio de la imputabilidad en sus conceptos formal y material, examinados los enfoques biológicos, psicológicos y mixto, se concluye que los menores de edad, en principio general, no son iguales a los adultos, por cuanto no ha concluido en ellos, el desarrollo psicobiológico, ni ha culminado el

¹ Horst Schonbohm, Poder judicial del Perú – Consejo Nacional de la Magistratura – Cooperación Alemana. (2018) *“Manual de Sentencias Penales Aspecto Generales de Estructura, Argumentación y Valoración Probatoria – reflexiones y Sugerencias”*

proceso de integración social, consecuentemente, al no actuar con la plena capacidad y madurez mental suficiente que les permita discernir y comprender, en toda su magnitud, la connotación de la antijuricidad, no son sujetos de imputabilidad o responsabilidad penal. De acuerdo a ello, no puede exigírselas, sin la asistencia de personas adultas, una respuesta satisfactoria a las normas jurídicas establecidas, como lo sería, si tuvieran la motivación coactiva positiva que representa la amenaza de la pena. La ley reconoce: a los adolescentes mayores de catorce años, capacidad civil especial y capacidad penal conforme a lo normado en el artículo IV del Título Preliminar, en consonancia con la parte in fine del artículo 46 del Código Civil, capacidad que les permite ejercer de manera directa y personal determinados derechos, de la misma forma, que les permite asumir determinadas responsabilidades. La responsabilidad penal que asumen los adolescentes mayores de catorce años por infringir la ley penal es determinada en los procesos penales, con las garantías y derechos inherentes al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, de acuerdo a la legislación pertinente y sometidos a la competencia de los órganos que conforman el sistema de administración de justicia especializada en niños y adolescentes.

Debido a que los adolescentes mayores de catorce años, no han completado el proceso de madurez mental, ni de asimilación de las normas de convivencia social, no podría establecerse respecto a ellos, el juicio de reproche penal de la misma forma que a los adultos, lo cual no significa que no pueden ser pasibles de sanciones acordes a su minoría de edad y a las normas y procedimientos propios de la legislación de menores. Sanciones que difieren totalmente de las penas impuestas a los adultos, pues el Juez de Familia aplicará –de acuerdo a cada menor, a su entorno social y a las particularidades de cada caso –la medida socio educativa más adecuada y eficaz a la finalidad rehabilitadora y resocializadora que se pretende alcanzar a través de

las mismas.

Lacrampette, N. (2010). Responsabilidad Penal Juvenil, Exclusión y Democracia. (Tesis para optar al Título Profesional Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales), Universidad de Chile, Chile, señala que el nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil implementado en Chile es el primer paso de un proceso de perfeccionamiento del estatuto jurídico de los/as jóvenes como sujetos de derecho, el cual debe entenderse dentro del actual contexto de modernización de la justicia chilena y de implementación de los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la legislación nacional. La LRPA constituye un importante avance respecto del anterior sistema de tratamiento de los/as jóvenes en conflicto con la justicia penal, principalmente en cuanto elimina el trámite de discernimiento y asegura a los/as imputados/as o acusados/as de la comisión de un delito una serie de derechos procesales y sustantivos con los que no contaban previamente, además de diferenciar efectivamente la respuesta jurídico procesal otorgada a los/as infractores de ley respecto a la de los/as jóvenes en circunstancias de riesgo y vulnerabilidad social. Sin embargo, más allá de la implementación formal del sistema y de los logros recién señalados, existe una serie de deficiencias en el funcionamiento real de diversas instituciones que intervienen en las distintas fases por las que transita un/a adolescente al cual se ha imputado la comisión de un delito. Estas falencias afectan negativamente la consecución de los objetivos que la LRPA declara perseguir, por ejemplo, en lo que dice relación con la insuficiencia o inexistencia de adecuados programas de capacitación laboral en los centros de privación de libertad -implicando que los/as jóvenes que egresen de tales centros no tendrán posibilidades de optar a empleos estables y bien remunerados en el mercado laboral formal – o con el excesivo tiempo de ocio que tienen los/as jóvenes en dichos centros -que les produce ansiedad y

frustración - y la falta de capacitación de los profesionales que trabajan en contacto directo con estos/as jóvenes -que impide otorgarles el tratamiento adecuado que requieren según su edad y circunstancias particulares. Por otro lado, existen ciertas áreas de la LRPA que requieren especial atención por cuanto su formulación en la ley es deficiente. Una de ellas es el tratamiento de la medida cautelar de internación provisoria, que presenta problemas tanto en su regulación legal como en su aplicación práctica. En primer lugar, no se establece en la ley un límite determinado de tiempo más allá del cual no puede extenderse la prisión preventiva, a consecuencia de lo cual su duración efectiva en la práctica supera ampliamente lo que podría ser considerado adecuado para una medida de carácter "provisorio". Si a ello se le suma el hecho de que la prisión preventiva se está aplicando excesivamente en relación a la cantidad de aplicación efectiva de penas privativas de libertad por los mismo delitos, y que ésta es procedente en casos en que finalmente no se cumplen los requisitos para la aplicación de sanciones privativas de libertad, puede concluirse que internación provisoria reviste más características de sanción que de medida cautelar, lo cual constituye un serio atentado en contra de la presunción de inocencia de los y las jóvenes afectados y de las normas de derecho internacional que establecen que cualquier medida privativa de libertad debe ser utilizada únicamente como último recurso y por el menor tiempo que proceda. Resulta particularmente preocupante, desde el punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que la LRPA considere que la gravedad del delito imputado es un factor a considerar para decidir si procede o no la aplicación de la internación provisoria, por cuanto los estándares internacionales conciben sólo dos circunstancias que hacen procedente esta medida: el asegurar la comparecencia de él o la joven ante el tribunal y el hecho de que tal joven pueda constituir un peligro inmediato para sí mismo/a o para los demás; esto, en consideración al imperio de la presunción de inocencia que opera a favor de estos/as adolescentes. En este sentido,

la gravedad del delito imputado resulta jurídicamente irrelevante a la hora de determinar la procedencia de la prisión preventiva, puesto que el/la joven es, en rigor, inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra, de lo cual se deriva que no puede utilizarse en su contra la gravedad del delito que se le imputa por cuanto el/la joven es inocente de tal delito al momento de decretarse la medida cautelar. La presunción de inocencia exige que estos/as jóvenes sean considerados/as y tratados/as como inocentes mientras no se dicte sentencia en su contra, y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sólo admite razones de riesgo procesal o de peligro para el/la joven o las demás personas para justificar la procedencia de la medida cautelar de internación provisoria. Con respecto a las sanciones privativas de libertad, cabe mencionar también que de los cinco tramos de sanciones que establece la LRPA, sólo uno de ellos (el primero) no contempla la posibilidad de aplicar penas privativas de libertad. En consecuencia, resulta que será el juez el llamado a definir cuáles son los “delitos más graves” que ameritan la privación de libertad, en circunstancias que para lograr que efectivamente se cumpla con el principio de la utilización de la privación de libertad como medida de último recurso, la procedencia de su aplicación debería estar definida taxativamente en la ley y reservada exclusivamente para los delitos más graves, de manera tal que no se diese margen a situaciones que se verifican actualmente como por ejemplo, que existan jóvenes privados de libertad por el delito de hurto simple. En relación con lo anterior, resulta interesante constatar que de los 5 países latinoamericanos cuyos sistemas de responsabilidad penal juvenil fueron esbozados en el Capítulo II, sólo uno cuenta con límites a la sanción privativa de libertad más altos que los chilenos. En efecto, Brasil, Ecuador, El Salvador y Perú limitan la extensión de las penas privativas de libertad a períodos que van desde los 3 a los 7 años, mientras que en Costa Rica estos límites están establecidos en 10 y 15 años, según el tramo etario. Estos datos permiten aventurar que en

Chile no se interpreta de la misma manera que en el resto de la región la disposición de la CDN que ordena la aplicación de la privación de libertad “por el período más breve que proceda”. Ello podría ser una buena razón para examinar la posibilidad de una modificación legal a este respecto, especialmente considerando que uno de los objetivos principales de la LRPA es la reinserción social de los jóvenes. En este sentido, a partir de la investigación realizada sobre este tema sostenemos que existe una contradicción estructural entre las ideas de privación de libertad y reinserción social presentes en la ley, puesto que por una parte se explicita que la reinserción social es uno de los fines del sistema y paralelamente se dictan sentencias con largos períodos de internación. Conjugando ambos hechos, inevitablemente se concluye que la mencionada reinserción social debería lograrse en el periodo de internación del joven en el centro de privación de libertad, lo cual no es posible: ¿cómo podría enseñarse a vivir en libertad a partir de la privación de la libertad? Las penas privativas de libertad, lejos de contribuir a la inserción social de los jóvenes, aumentan su segregación y al mismo tiempo promueven las carreras delictuales. Es por ello que sostenemos que es contradictorio pensar en inserción social a través de la privación de libertad, porque esto último es más un factor de delincuencia que algo que la disminuye. Para potenciar las posibilidades de insertar en la sociedad a los/as jóvenes infractores de ley se debe favorecer la aplicación de todas aquellas alternativas que disminuyan o atenúen, en la medida de lo posible, -y particularmente en el caso de los infractores primerizos -la intervención del sistema judicial, a saber: el principio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, las sanciones en medio libre y la sustitución y remisión de las condenas. Con ello se tiende a minimizar los efectos estigmatizantes y segregatorios propios del sistema en el caso de los/as jóvenes que no tienen un compromiso delictual. Con respecto al caso particular de las mujeres adolescentes infractoras de ley, los efectos estigmatizantes a los que se ha hecho referencia se ven

aumentados: por el hecho de ser mujeres estas jóvenes deben cargar con el peso de los estereotipos sociales y culturales que históricamente les han otorgado una posición subordinada respecto del varón y les han exigido comportarse de acuerdo a ciertas normas morales que no responden a sus convicciones personales sino a un modelo de mujer ideal, por lo que cualquier desviación de estos estándares impuestos por la sociedad tendrá un reproche mayor contra ellas. Para poner fin a la perpetuación y reproducción de estos estereotipos discriminatorios dentro del sistema de justicia juvenil, resulta urgente que se lleven a cabo las capacitaciones en materia de género que la normativa establece que deben recibir los actores, funcionarios y operadores del sistema. Este problema específico de las mujeres trasciende lo netamente legal, por lo cual es esencial intentar primero un cambio cultural al respecto, que sustente cualquier futura modificación legal. Finalmente, consideramos relevante mencionar que la obtención de conocimiento actualizado proveniente de fuentes oficiales en materia de responsabilidad penal juvenil resulta sumamente difícil. Existe mucha información en esta materia que no es pública, el sistema tiende a ser hermético y la mayor parte de los estudios e investigaciones que se realizan desde los mismos operadores del sistema no están disponibles para el público general. Este hecho dificulta la realización de estudios como el presente e impide que la opinión pública conozca datos relevantes sobre el funcionamiento real y actual del sistema, puesto que la mayor parte de datos que puede encontrarse en los medios de comunicación tradicionales se encuentra temporalmente desfasada y es considerablemente poco precisa.

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. MODELOS DE LA JUSTICIA DE MENORES

a. EL MODELO DE PROTECCIÓN

Emerge con la sociedad industrial, las desigualdades

sociales y económicas dieron origen a brechas en la estructura socioeconómica, está inmerso dentro de la doctrina de situación irregular, en América-latina estuvo en auge en el curso de los años 30, los menores que infringían la ley fueron considerados anormales, enfermos, obligándolos a separarse de su entorno social para reeducarlos, tuvo una finalidad proteccionista, caritativa, piadosa, protegiendo a los más necesitados y ejerciendo control sobre ellos sustituyendo el ejercicio de la patria potestad. El profesor Chunga F. (2016, pág. 101 a 106) explica que la doctrina de situación irregular consideró a la persona menor de edad ser incompleto, incapaz y objeto de protección, el magistrado intervenía en el proceso cuando consideraba la existencia del peligro material o moral adoptando la medida pertinente con facultad discrecional y por tiempo indefinido, este modelo permitió la restricción de los derechos y privación de la libertad de los menores de edad, criminalizándolos sin evaluar la insatisfacción de sus derechos económicos, sociales, culturales y las situaciones difíciles por la que atraviesan.

b. EL MODELO EDUCATIVO

Se expuso en el curso de los años 60 limitó la inclusión de los menores conjuntamente con la justicia penal aplicada a los adultos, este modelo distingue al Estado como responsable de erradicar la pobreza mejorando las condiciones de trabajo, salud y educación, aplicó una política asistencialista a la población vulnerable (menores y mujeres), limitaba la aplicación de métodos represivos, buscando que el procesamiento por infracción a la ley penal se judicialice, permitió aplicar soluciones alternativas.

c. EL MODELO DE RESPONSABILIDAD O MODELO DE JUSTICIA O GARANTISTA

El modelo tiene como fin educar al adolescente que

infringe la ley penal, debe asumir su responsabilidad por el hecho perpetrado, elimina el discurso de política criminal que fue en apariencia protectora colocando al menor en desventaja respecto a los adultos.

El profesor Chunga L. (2012) cita a Jiménez Salinas quien señala las siguientes características:

- a) El menor es responsable de los actos que realiza.
- b) Acerca las garantías y los derechos de las personas adultas y menores.
- c) Limita la intervención de la justicia.
- d) Amplia el catálogo de medidas reduciendo la aplicación que conlleva a la privación de la libertad.
- e) Establece límites a la edad del menor para aplicar la justicia penal.

El Perú acoge la Doctrina de Protección Integral después de ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, adecuó el marco legal en relación a los principios consagrados en los derechos humanos, permitiendo aplicar un proceso de juzgamiento especializado, reconociendo a la persona menor de edad el respeto a sus derechos individuales, al principio de legalidad y el debido proceso, valorando los hechos como un problema humano, examinando la conducta infractora del menor de edad dentro de los elementos de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y como consecuencia se considera la responsabilidad penal especial, aplicando una medida de protección o socio educativa según sea el caso. La persona menor de edad en pleno desarrollo es sujeto de derechos, por consiguiente, la medida privativa de la libertad está obligada a aplicarse como último

recurso y por el menor tiempo posible, debiéndose dar preferencia a otras medidas alternativas al procesamiento, el juez ejerce funciones jurisdiccionales garantizando la plena satisfacción de los derechos del menor, estando obligado a oír y brindar un trato diferenciado².

El maestro Chunga L. (2012) señala que “(...) el Derecho de Menores es un derecho singular, garantista y tutelar que regula las normas jurídicas relativas al reconocimiento de los derechos y libertades de los menores valorando las circunstancias especialmente difíciles para lograr el pleno y cabal desarrollo de su personalidad, para lograr tal propósito la sociedad está obligada a considerar al menor como un presente y no un futuro”.

La doctora Bravo G. D. (2014) manifiesta “(...) el adolescente es capaz de comprender la ilegalidad de su conducta, tiene la capacidad de la culpabilidad, lo cierto es que esta se encuentra disminuida por su situación personal de inmadurez, no pueden ser imputables en razón de que son “inmotivables” no reaccionan al estímulo como lo haría un adulto, sus aptitudes psíquicas están en desarrollo”; asimismo, el profesor Juan Carlos García (2016, pág. 23 a 26) manifiesta que justicia penal restaurativa es un programa que utiliza el proceso de recuperación y renovación entre la víctima, el infractor y la sociedad, a través de programas que atiendan necesidades individuales y colectivas de los participantes, el presunto infractor hace lo necesario para reparar el daño causado, el programa permite emplear sanciones alternativas, reparar del daño y no judicializar el proceso debido a las consecuencias que negativas que inciden en el menor, evitando que la persona menor de edad sea expuesto a la apertura de proceso a nivel judicial o si se

²Chunga Lamonja, Fermín G. (2016) *“Comentarios al Código de los Niños y Adolescentes – La Infracción Penal y los Derechos Humanos” Primera Edición*, pág. 109-112.

encuentra inmerso dentro de uno permite sustraerlo con fines educativos y reflexivos, su empleo requiere los siguientes requisitos: la infracción no debe revestir gravedad, el adolescente y sus padres quedan obligados a someterse a charlas de orientación y consejería, los antecedentes del adolescente su medio familiar y la reparación del daño causado a la víctima, no implica la aceptación de la comisión de la infracción.

La justicia restaurativa es una propuesta con base epistemológica el proceso sirve para imponer una pena al adolescente infractor se le retribuye con una sanción, actualmente la víctima es un actor del proceso penal, *el procesamiento judicializado después de recibido el dictamen fiscal el juez emite una resolución de sentencia sustentando su decisión en la existencia del daño causado, la gravedad de los hechos, el grado de responsabilidad del adolescente, el informe multidisciplinario e informe social y la capacidad del adolescente para cumplirla.* El Estado Garantista prioriza la defensa de la persona humana y de su dignidad como aspecto esencial, todas las categorías del derecho están obligadas a cumplir un papel social de construir el país y edificar una cultura jurídica, brindando especial atención a quienes a través del tiempo fueron postergados, debiendo ahora participar y jugar un papel importante dentro de la sociedad.

Los Tipos de responsabilidad que considera nuestro sistema legal es la **responsabilidad penal común** – absoluta para la imposición de penas desde los 18 años establecida en el inciso 2 del artículo 20° del Código Penal y la **responsabilidad penal específica** que permite imponer la medida socioeducativa como retribución a la comisión de un acto doloso aplicada a las persona menor de edad desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 años establecida en el artículo 184° CNA., y la **irresponsabilidad penal absoluta** aplicada a las personas

menores de 14 años de edad aplicando como medida de protección señalada en el artículo 242° del Código de los Niños y Adolescentes.

2.2.2. NORMATIVA PARA APLICAR LA MEDIDA SOCIO EDUCATIVA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

a) La Convención sobre los Derechos del Niño:

En adelante la Convención, ratificada por el Perú el 04 de setiembre de 1990, basada en derechos de primera y segunda generación, la Declaración de Ginebra (26 de setiembre del 1924) la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Convención en el Preámbulo y el artículo 1° entiende como niño a todo ser humano menor de dieciocho años de edad en virtud que la ley le sea aplicable, reconoce que es inalienable la dignidad e igualdad de derechos de la persona menor de edad, así también la existencia de niños que viven en circunstancias difíciles que necesitan protección y asistencia para asumir a plenitud sus responsabilidades dentro de la sociedad.

La Convención señala que las persona menor de edad de 18 años que se encuentren inmersos en un procesamiento por infracción a la ley penal al tiempo que el desarrollo del procesamiento deben recibir asistencia jurídica adecuada, no pueden ser obligado a prestar declaración o declararse culpable, recibirán un trato apropiado respetando la presunción de inocencia informándole con prontitud y directamente los cargos de los que es acusado a fin de que prepare su defensa técnica, no podrá ser declarado culpable por acción u omisión que no esté prohibida por la ley al momento de su comisión, el proceso

es asumido por la autoridad competente considerando en todo momento su edad y situación personal, la detención es conforme a Ley brindando un trato humanitario, fomentando el respeto de su dignidad y el valor del respeto a los derechos humanos de los demás, no será sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; las persona menores de edad que se encuentren privados de la libertad, por ser hallados culpables, estarán separados de los adultos, procurando su bienestar promoviendo su recuperación física, psicológica y la reintegración social, preparándolo para que asuma su función constructiva en la sociedad.

b) El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en la Observación General Número 10:

Analiza los criterios y orienta la formulación de políticas generales relacionadas a la justicia juvenil de los Estados Parte, tiene como **principios básicos de una política general** la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo, respeto a la opinión y dignidad del niño, la presunción de inocencia, el principio de igualdad de las partes y garantías de un juicio imparcial; también señala que **los elementos básicos de una política general** son la prevención de la delincuencia juvenil (a través del desarrollo pleno y armonioso de la personalidad, las aptitudes, capacidad mental y física del niño), intervenciones y remisión de casos(promover su reintegración y el desempeño de una función constructiva de la sociedad), la justicia no tiene efecto retroactivo, la elaboración de la política general debe considerar que los niños que tienen conflicto con la justicia son menores a 18 años, debiendo recibir un trato digno diferenciado en razón de su desarrollo físico, psicológico y sus necesidades emocionales y educativas, respetando su opinión y expresión en

los asuntos que le concierne evaluando la declaración de la persona menor de edad verificando la edad y grado de desarrollo del niño.

Los derechos procesales que le asisten al menor según el Comité de los Derechos del Niño señalados en la Observación General N° 10 (2017) son: acceso a la justicia, asistencia legal adecuada, impugnar la legalidad de la privación de la libertad ante un tribunal competente e imparcial, el menor tiene derecho a preparar su defensa técnica si no contara con los medios para acceder a la asesoría privada se le brindara asistencia legal gratuita; el acto infractor atribuido será notificado de manera oportuna, directa y oral garantizando la comprensión de los hechos atribuidos recordando que la falta de comprensión por parte del niño le ocasiona temor a las consecuencias desconocidas o a una posible privación de la libertad, acto que deberá estar revestido de legalidad máximo por 24 horas recordando que esta medida (internamiento posterior a la sentencia o prisión preventiva) atenta contra la presunción de inocencia sustentada en principios fundamentales, la privación de la libertad y detención preventiva son proporcionales a la gravedad del hecho, las circunstancias del adolescente infractor y ratifican que la privación de la libertad es el último recurso y por el periodo más breve buscando el fomento de la concienciación y la formación de la persona menor de edad.

c) La Observación General número 20(2016) y los principios generales de la Convención:

Aportan una visión sobre la efectividad de los derechos del niño mientras atraviesa la adolescencia, examinan el proceso de aplicación que sirve de guía para determinar las medidas necesarias que garantizan la efectividad de los

derechos del niño mientras se desarrolla la adolescencia, respecto a la evolución del procedimiento judicial o administrativo que afecta al niño resalta la importancia de brindar al menor la oportunidad de ser escuchado protegiéndolo de injerencias arbitrarias, ilegales o ataques a su vida privada, familiar, su honra y reputación. La observación indica que los Estado Parte respetarán y darán efectividad a los derechos enunciados, asegurando su aplicación en cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna, las medidas que adopten las instituciones público o privadas, tribunales o autoridades atenderán el interés superior del niño, el Estado brindará atención, protección y asistencia especial a las persona menor de edad que se encuentren privados de su medio familiar de manera temporal o permanente, sólo serán separados de su familia cuando las autoridades competentes lo determinen con acuerdo a ley, respetando los procedimientos aplicables, permitiendo que el menor mantenga relaciones personales y contacto directo con sus familiares³.

**d) Las Observaciones Finales sobre los Informes Periódicos
Cuarto y Quinto Combinados del Perú (2016):**

Observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño al Estado Peruano expresan que la duración máxima de las actuaciones penales no debe sobrepasar los 50 días, también recomienda que el servicio prestado por el Sistema de los Centros Juveniles Centros de Orientación y Centros de Rehabilitación deben estar adaptado a los principios, garantías y derechos enunciados en la Convención y demás normas conexas sobre la materia, asegurando que periódicamente la revisión de la situación jurídica de los menores internado a fin de evaluar la variación de sus situación jurídica y posibilidades de

³Convención sobre los Derechos del Niño (2016) artículos 2°, 3°, 4°, 9°, 12°, 16° y 20°.

externamiento.

e) Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores – Reglas de Beijing:

Señalan que los principios generales de la justicia de menores es concebida como una parte integral del desarrollo nacional del país, la política social buscará el bienestar de las persona menor de edad, debiendo administrarse en el marco general de justicia social para todos los menores de tal manera que contribuya a la protección de los jóvenes y a mantener el orden pacífico de la sociedad, los servicios que presta la justicia se perfeccionan y sistematizan con el objeto de mantener la competencia de los funcionarios que intervienen, así como los métodos, enfoques y actitudes adoptadas.

Las reglas de Beijing en el literal a) y b) del numeral 2.2 señalan que es aplicable para todo menor (niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto) que cometa un delito (es todo comportamiento -acción u omisión- penado por la ley con arreglo al sistema jurídico de que se trate) e infrinja la ley penal sin ningún tipo de distinción y con imparcialidad, dentro del sistema jurídico con perspectiva jurídica – práctica, considerando la satisfacción de las necesidades básicas del menor infractor y las de la sociedad. El artículo 7.1. enuncia las **Garantías procesales básicas** de los que es titular el menor infractor, presunción de inocencia, derecho a ser notificado de la acusación que se le imputa, el derecho a no responder a las preguntas, derecho a ser asesorado por un abogado, derecho a la presencia de sus padres o tutores en el decurso del proceso, derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a estos y el derecho de apelación ante el superior jerárquico, los

artículos 3°, 5°, 6° y 8° señalan que sistema de justicia de los menores busca su bienestar y la respuesta ofrecida por el Estado debe ser proporcional a las circunstancias personales e individuales del menor y el delito, el magistrado será un profesional capacitado y preparado en el ejercicio con capacidad y profesionalismo, que puede usar sus facultades discrecionales en cualquiera de las etapas de la administración de justicia, todas las etapas del proceso respetarán las garantías procesales básicas evitando la publicidad indebida del procesamiento por respeto al derecho a la intimidad del menor infractor.

Las Reglas de Beijing en los artículos 10°, 11°, 12° y 13° señalan que posterior a la detención del menor **en el decurso de la investigación y desarrollo del procesamiento** el hecho se notificará a sus padres o tutor, la autoridad a cargo en base a las circunstancias particulares del caso evaluará la posibilidad de liberar al menor con el objetivo de protegerlo y evitar un posible sufrimiento y daño en busca de promover su bienestar; la autoridad competente (Policía especializada, fiscalía, juzgado u otro organismo) debe considerar la posibilidad de aplicar la remisión como facultad discrecional previo consentimiento del menor o sus padres o tutor para evitar los efectos negativos del proceso; bajo circunstancias y condiciones que evidencien la comisión del delito por parte de la persona menor de edad existe la posibilidad de detención preliminar la misma que se hará efectivo en ambientes separado de los adultos.

La resolución de sentencia es emitida por la autoridad competente, quien decidirá con arreglo a los principios de un juicio imparcial y equitativo, este procedimiento ha de favorecer los intereses del menor permitiendo su participación y libertad de expresión, el menor tiene derecho a la asesoría judicial de ser el

caso a la asistencia jurídica gratuita, la autoridad competente puede prescindir de dicha asistencia si es que interés del menor así lo requiera. Previa a la emisión de la sentencia se analizará la investigación completa la misma que considerará los informes sobre el medio social, las condiciones de vida del menor y las circunstancias sobre las que habría consumado el delito.

Las Reglas de Beijing señalan que **la decisión judicial** se basará en los siguientes **principios**:

- a. La respuesta al delito siempre es proporcionada a las circunstancias y gravedad del delito, a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad.
- b. Las restricciones a la libertad personal del menor se imponen tras cuidadoso estudio reduciéndose al mínimo posible.
- c. Solamente se impondrá la privación de la libertad personal del menor en caso sea condenado por acto grave en el que concurra la violencia contra otra persona o reincidencia por consumir otros delitos graves, siempre que no haya otra alternativa como respuesta al hecho.
- d. Se deberá considerar principalmente el bienestar del menor.

Los delitos en los que incurran los menores no se castigarán con la pena capital ni con castigos corporales, la autoridad competente puede suspender el procesamiento en cualquier momento pudiendo aplicar una diversidad de medidas alternativas a la privación de la libertad (libertad vigilada,

servicios a la comunidad, sanciones económicas, indemnizaciones, devoluciones, ordenes de tratamiento intermedio y otras de naturaleza similar), excepcionalmente se internará al menor infractor por el menor plazo posible. Los casos de menores infractores se tratarán con celeridad, sin demora innecesaria y de manera expedita, debiendo los registros estar reservado exclusivamente a las partes, todo el procesamiento estará a cargo de personal especializado y capacitado a través de sistemas educativos adecuados.

- f) **Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil – Directrices de RIAD** en sus principios fundamentales enfoca la prevención como parte primordial en la comisión del delito en la sociedad es necesario que está en su conjunto se oriente a viabilizar un desarrollo armonio del adolescente dejando de considerarlos como objetos de socialización y control. El RIAD en el capítulo IV Legislación y Administración de Justicia para Menores, artículos 52°, 53°, 54°, 55°, 58° y 59° señala que los programas de prevención de la delincuencia se han de planificar y ejecutar sobre la base de conclusiones fiables las que serán el resultado de una investigación científica, supervisadas, evaluadas y readaptadas periódicamente, igualmente los gobiernos aplicarán leyes y procedimientos especiales que fomenten y protejan los derechos de los menores buscando su bienestar y el interés general de los jóvenes, leyes que prohíban la victimización, los malos tratos, tratos degradantes, así como su utilización en la comisión de actividades delictuosas aprobando y aplicando leyes que limiten el uso de armas de fuego y el consumo de sustancias psicotrópicas por menores de edad. Es fundamental la interacción y coordinación técnica y científica entre organismos y servicios educativos, económicos, sociales y de salud con el

sistema judicial, fomentando un carácter multidisciplinario e interdisciplinario en la prevención de la delincuencia y justicia de menores⁴.

g) Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad – Reglas de la Habana fue concebida con el objetivo de servir como patrón práctico de referencia para los profesionales que están inmersos en la administración de justicia especializada, por ello las Reglas de la Habana consideran como perspectiva fundamental que el sistema de justicia de menores respetará los derechos y la seguridad del menor⁵ fomentando su bienestar físico y mental, la privación de la libertad será el último recurso por el periodo mínimo, aplicado a casos excepcionales y se efectuará respetando los derechos humanos del menor, considerando en el artículo 11° literal b) privación de la libertad es toda forma de detención o encarcelamiento, así como la privación de la libertad en un centro público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por mandato de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública.

Los menores detenidos o en prisión preventiva que se encuentren a la espera de juicio son considerados inocentes y serán tratados como tal, evitando la limitación de la detención antes de juicio, esta se aplicará sólo por circunstancias excepcionales y por el tiempo más breve posible, la autoridad competente puede aplicar medidas sustitutorias, los menores detenidos que estén esperando juzgamiento estarán separados de los declarados culpables. Las condición del menor que no se encuentre juzgado cumplirán con el respeto a la presunción de inocencia, la duración de la detención, la condición jurídica y las

⁴Directrices de RIAD, capítulo VII Investigación, formulación de normas y coordinación.

⁵Reglas de la Habana, artículo 11° literal a) definición de menor es toda persona de menos de 18 años de edad. La edad límite por debajo de la cual no se permitirá privar a un niño de su libertad debe fijarse por ley.

circunstancias personales del menor, el capítulo III Menores detenidos o en prisión preventiva, artículos 17° y 18° señala los siguientes:

- a. Derecho al asesoramiento jurídico o asistencia legal gratuita, mantener comunicación constante con su defensor técnico, respetando la reserva de las comunicaciones con este.
- b. Cuando sea posible darán la oportunidad al menor de obtener un trabajo remunerado y a continuar con sus estudios o capacitación.
- c. Los menores están autorizados a recibir y conservar material de entretenimiento y recreo que sea compatible con la administración de justicia.

h) La Constitución Política del Perú en el artículo 1° expresa que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, en la dignidad humana se encuentra la razón de ser de la libertad la misma que es reconocida como derecho por el ordenamiento legal, es el valor supremo de la sociedad está centrada en el valor del ser humano como protagonista de las actividades sociales y jurídicas, el Estado facilita la plenitud de los derechos garantizándolas dentro del Estado de derecho⁶; seguidamente en el artículo 2° se declaran los derechos reconocidos constitucionalmente que le asisten a la persona también conocidos como derechos innominados son de carácter subjetivo y derivan de la condición humana valorada en el orden jurídico, por señalar algunos citamos el derecho a la igualdad ante la ley, al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, a la legítima defensa, a la libertad y

⁶Raúl Chanamé Orbe "Comentarios a la Constitución" Quinta Edición, Juristas Editores, Lima Julio 2008.

seguridad personal, no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal salvo en los actos previstos por ley, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su culpabilidad, la detención se da por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de delito flagrante, nadie será víctima de violencia moral, psíquica o física ni sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes.

El artículo 4° de la Carta Magna señala que **la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente** (...); al respecto el maestro Chanamé Orbe R (2008) manifiesta que todos los seres humanos jurídicamente son iguales, pero por su naturaleza son diferentes, basada en esta razón a los niños se les brinda especial protección hasta que adquiera madurez y a los adolescentes hasta integrarlo plenamente en la sociedad. El profesor F. Carbonell (2010) manifiesta que el Estado y la sociedad brindarán protección a la persona menor de edad en razón de que se encuentran en proceso de desarrollo físico y psicológico, la edad es importante para adquirir plena capacidad de obrar, integrada en la personalidad del adolescente integrado por varios de sus actos con elementos biológicos, psicológicos y jurisdiccionales formando una estructura física, espiritual y social. La Cuarta disposición final y transitoria de la Constitución del Perú (1993) establece que el Estado cumplirá con los instrumentos internacionales ratificados por el país, sea miembro o parte, respetando los Derechos Humanos expresados y consagrados en la citada normatividad.

- i) **El Código del Niño y del Adolescente**, en adelante CNA. vigente a la fecha de estudio, expone que los niños y adolescentes son sujeto de derechos, libertades y protección

específica, esta norma se aplica a todos los menores sin distinción, considera adolescente al niño a partir de los 14 años cumplidos, señala como fuentes a la Carta Magna, la Convención y demás instrumentos internacionales ratificados por el país, el Código Civil, Penal, Código Procesal Penal y el Procesal Civil se emplean supletoriamente. La Ley N° 27337 en el Título Preliminar y artículos 191°, 215°, 216° y 218° manifiesta que los operadores de la justicia especializada aplicarán el interés superior del niño y del adolescente en las medidas adoptadas respecto de las persona menor de edad son considerados como un problema humano, motivo por el cual el magistrado al emitir **resolución de sentencia** valora la existencia del daño causado, la gravedad de los hechos, el grado de responsabilidad del adolescente, el informe multidisciplinario y el informe social, la resolución expone los hechos, los fundamentos de derecho analizando el acto infractor, la medida socio educativa a imponerse y la reparación civil, de no probarse la participación del adolescente en la comisión de los hechos o los hechos son atípicos se emite sentencia absolutoria.

Las medidas socio educativas a solicitarse por el fiscal están establecidas en el artículo 204° del CNA. “(...) en mérito a las diligencias señaladas el Fiscal podrá: a) Solicitar la apertura del proceso; b) Disponer la Remisión; y c) Ordenar el archivamiento, si considera que el hecho no constituye infracción; concordante con el artículo 236° refiere que **la Internación** sólo se aplica cuando: a) Se trate de un acto infractor doloso que se encuentre tipificado en el CP. con una pena mayor a los cuatro años; b) Por reiteración en la perpetración de otras infracciones graves; y c) Por incumplimiento injustificado y reiterado de la medida socio-

educativa impuesta; la medida impuesta al adolescente infractor no sólo se basará en la gravedad del hecho también considerará las circunstancias personales del menor, atendiendo al interés superior del niño, de comprobarse su responsabilidad se procede a la aplicación de **la medida socio educativa** que se indica en el artículo 231° del **Código de los Niños y Adolescentes**: sanciones socio educativas (amonestaciones, libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad o reparación directa a la víctima), mandatos y prohibiciones (fijar un lugar de residencia determinado o cambiar de lugar de residencia al actual, no frecuentar determinadas personas, no frecuentar bares, discotecas o determinados centros de diversión, espectáculos u otros lugares señalados por el juez, no ausentarse del lugar de residencia sin la autorización judicial previa, matricularse en una institución educativa – pública o privada- o en otra cuyo objeto sea la generación de un oficio o profesión, de acuerdo a las condiciones y requisitos que se establezcan en el reglamento, en concordancia con la Ley General de educación, desempeñar una actividad laboral o formativa laboral, siempre que sea posible su ejecución y se encuentre dentro de las normas legales, no consumir o ingerir bebidas alcohólicas o drogas, internar al adolescente en un centro de salud, público o privado, para un tratamiento desadictivo), y sanciones privativas de la libertad (internación domiciliaria, libertad restringida o internación).

El CNA. en el artículo 229° expone que la medida socio educativa tienen por objeto la rehabilitación del adolescente infractor, entre las medidas socioeducativas que son pasibles de aplicarse están la amonestación, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, libertad restringida e internación, pudiendo recibir tratamiento en medio abierto (atención

esporádica), semi-abierto (atención ambulatoria) o medio cerrado (internamiento por enfermedad, abandono o infracción penal), al respecto el doctor Hernández Alarcón (2016) señala que la esencia de la medida socio educativa es propia de la doctrina de situación irregular pero que se ha mantenido en Américalatina dentro de las legislaciones adscritas a la doctrina de protección integral por resistencia, tanto en la ley como en la jurisprudencia, dada la negativa de aceptar su naturaleza penal, la sanción que aparece como un bien corre el riesgo de ser usada y abusada por lo que “sólo reconociendo la naturaleza restrictiva de la medida socioeducativa, las garantías de justicia que le asisten serán mayores a los que goza un adulto pudiendo asegurar al adolescente en tanto de desarrolla el procesamiento como en la ejecución de las medidas”.

El juez analizará y aplicará de manera conjunta los instrumentos internacionales y nacionales sobre la materia citados líneas arriba, evaluando los siguientes aspectos:

- a. La edad del adolescente, sus circunstancias personales, así como la situación psicológica, educativa, familiar y sociocultural, según el informe multidisciplinario.
- b. La magnitud del daño causado.
- c. El nivel de intervención en los hechos.
- d. La capacidad para cumplir la sanción.
- e. Las circunstancias agravantes o atenuantes reguladas en el Código Penal o Leyes Especiales, en lo que corresponda.
- f. La proporcionalidad, racionalidad e idoneidad de la sanción.

- g. Los esfuerzos del adolescente por reparar, directa o indirectamente los daños.

Adicionalmente, en caso de decidir la **sanción de internación, se explicará por qué considera que la privación de la libertad resulta ser indispensable en el caso específico, alegando los motivos por las cuales las otras medidas personales menos gravosas son incapaces de cumplir el mismo objetivo**, tal como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC-17/2002 señala *“en consideración a que la sanción en esta jurisdicción especial busca rehabilitar y no reprimir, la privación de la libertad será la última medida. Antes se valorarán otras medidas de carácter socioeducativo como: orientación familiar, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, la obligación de reparar el daño y libertad asistida”*. La resolución de sentencia considera el interés superior del niño, estará motivada, justificada y explicar las circunstancias referentes al niño, los elementos del interés superior, los elementos del caso concreto y la forma de ponderación en busca del bienestar de la persona menor de edad⁷.

2.2.3. EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

El Comité de los Derechos del Niño la Observación General Número 14 expone que el interés superior del niño es un concepto dinámico que abarca diversos temas en constante evolución, es un estándar jurídico de observancia obligatoria declarada en la Declaración de los Derechos del Niño de 1956 párrafo 2, el concepto de **interés superior del niño exige adoptar un enfoque basado en los derechos**, en el que

⁷Comité de los Derechos del Niño – Observación General N° 14, numeral 97.

colaboran el Estado y la sociedad en conjunto a fin de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual holísticas del niño, promoviendo la dignidad humana y un cambio de actitud que favorezca el pleno **respeto de los niños como sujetos de derechos**, esto se evidencia en los siguientes aspectos:

- a. La elaboración de todas medidas de aplicación adoptadas por los gobiernos, la obligación de garantizar que el interés superior del niño sea empleada sistemática y de forma adecuada en todas las medidas de las instituciones públicas adopten especialmente en las medidas de ejecución, los procedimientos administrativos y judiciales que afectan directa o indirectamente a los niños.
- b. Las decisiones individuales tomadas por autoridades judiciales o administrativas o por entidades públicas a través de sus operadores, que afectan a uno o varios niños están obligados a velar que todas las decisiones judiciales y administrativas, las políticas y la legislación relacionadas con los niños expresen que el interés superior es una consideración primordial, esto incluye explicar cómo se ha examinado y evaluado el interés superior del niño, y la importancia que se le ha atribuido en la decisión.

El Comité subraya que el interés superior del niño es un concepto tripartito:

- a. **Derecho sustantivo** porque el derecho del niño y su interés superior es considerado primordial, evaluar y tener en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida y garantizando que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se

tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establecida como una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa e inmediata y puede invocarse ante los tribunales.

b. Principio jurídico interpretativo fundamental, en una disposición jurídica que admite más de una interpretación se elegirá la interpretación que satisface de manera más efectiva el interés superior del niño, los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecidos el marco interpretativo.

c. Norma de procedimiento, siempre que exista una decisión que afecte a un niño en concreto a un grupo de niños o en general el proceso de valoración de decisiones incluirá una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión sobre el niño o los niños interesados, la evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales; además, la justificación de la decisión dejará constancia de la consideración explícita de ese derecho, en este sentido, según el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General N° 14 indica que los Estados partes dejen constancia expresa del respetado del interés superior del niño, los criterios en los que se basó la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, sea de cuestiones normativas

generales o de casos concretos⁸.

Los operadores de justicia en las decisiones que involucran a menores de edad están obligados a considerar la satisfacción plena de los derechos e intereses⁹ de los adolescentes infractores. El Tribunal Constitucional en la sentencia N° 02132-2008-PA/TC, determina que este principio está implícito en el artículo 4° de la Constitución Política del Perú “la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, en concordancia con la Convención, ratificada por el Estado Peruano mediante Resolución Legislativa N°25278, expresada en el Título Preliminar del CNA.. Este principio rector es entendido como una necesidad para satisfacer todos los derechos de la infancia y la adolescencia, obligando al Estado e irradiando efectos en la interpretación de los demás derechos cuando el caso se refiere a menores de edad, el punto de referencia para asegurar la efectiva realización de los derechos contemplados en la Convención, cuya observancia permitirá al niño el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades¹⁰.

El artículo 3° de la Convención indica que el interés superior del niño constituye una consideración primordial en todas las medidas relativas a los niños adoptadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos esto implica que los órganos legislativos evalúen si las leyes emitidas benefician a los niños, los tribunales encargados de resolver conflictos de intereses basan sus decisiones en lo que sea favorable para el menor de edad; el Comité subraya que la protección del interés superior del niño significa que los

⁸El Comité de los Derechos del Niño, Observación general número 14(2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, artículo 3, párrafo 1, numeral 6.

⁹INEI Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento. Provincia y Distrito 2000-2015.

¹⁰Juan Carlos García Huayama “Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú” Editorial Lex & Iuris. Lima diciembre 2016, pág. 27-31.

tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, la represión o el castigo, serán sustituidos por los de rehabilitación y justicia restaurativa cuando se trate de menores infractores a la ley penal¹¹.

El análisis jurídico del Interés Superior del Niño y su relación con los principios generales de la Convención sobre los Derechos del Niño, se tiene los siguientes “en todas las medidas” incluye no sólo decisiones también actos, conductas, propuestas, servicios y procedimientos; “concerniente a” se refiere a medidas relacionadas que repercutirán directamente e indirectamente con un niño o un grupo de niños en general; “los niños” toda persona menor de 18 años sujeto dentro de jurisdicción estatal; “las instituciones público o privadas de bienestar social, los tribunales, autoridades administrativas o los órganos legislativos” abarca al Estado en su conjunto; “los tribunales” menciona procedimientos judiciales dentro de las actuaciones referidas a persona menor de edad, las que buscarán su bienestar a través de la rehabilitación y la justicia restaurativa; “los órganos legislativos” en las leyes a promulgarse se ha de considerar el interés superior del niño y el respeto a sus derechos; “una consideración primordial que se atenderá” es una obligación jurídica para los Estados, no puede decidirse a discrecionalidad respecto de un conflicto que se presente con el derecho de otras personas, dando preferencia a los derechos de la persona menor de edad atendiendo a sus circunstancias personales¹².

La aplicación y determinación del interés superior del niño se realiza en base a la determinación de los elementos relevantes y hechos concretos de cada niño en relación con los demás, siguiendo un procedimiento que vele por las garantías

¹¹Comité de los Derechos del Niño - Observación General N° 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial.

¹²Comité de los Derechos del Niño. Observación General N° 14, artículos 17°, 19°, 20°, 21°, 25°, 26°, 31° y 36°.

jurídicas y la aplicación del derecho.

Elementos a tener en cuenta para evaluar el interés superior del niño son los siguientes:

- a) La opinión del niño.
- b) La identidad del niño.
- c) La precisión del entorno familiar, las relaciones y vínculos que mantiene.
- d) El cuidado, protección y seguridad, buscando su bienestar.
- e) La situación de vulnerabilidad (discapacidad, pertenencia a un grupo minoritario, víctima de malos tratos, vivir en la calle, refugiado u otro similar).
- f) El derecho a la salud y educación.

Al respecto Claudio Grossman (2003) señala que es un principio de contenido indeterminado sujeto a la comprensión y extensión propios de la sociedad y momentos históricos, constituye un instrumento técnico que otorga poderes a los jueces, quienes apreciarán tal “interés” en concepto de acuerdo con las circunstancias del caso” luego explica cómo “se constituye en pauta de decisión ante un conflicto de intereses y criterio para la intervención institucional destinada a proteger al niño”, en caso de conflicto frente al presunto interés de un adulto, priorizarán el del niño, agrega que más allá de la subjetividad del término “interés superior del menor” este se presenta como “el reconocimiento del menor como persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo”, por ultimo a la hora de hacer

valoraciones hay que asociar el “interés superior” con sus derechos fundamentales. El autor Bidart Campos (1993) expresó que cuando la Convención habla de una consideración primordial hacia el “interés superior del niño” orientada no como simple consejo o una mera recomendación, sino una norma jurídica con fuerza normativa para tener aplicación en cuanto ámbito deba funcionar eficazmente: al legislar, al administrar, al juzgar y, a la vez, en el área de las relaciones entre particulares”¹³.

El interés superior del niño considera los parámetros siguientes:

- a. El carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de los derechos de la persona menor de edad.
- b. El reconocimiento de los niños como titulares de derechos.
- c. La naturaleza y el alcance global de la Convención.
- d. La obligación de los Estados partes de respetar, proteger y llevar a efecto todos los derechos de la Convención.
- e. Los efectos a corto, medio y largo plazo de las medidas relacionadas con el desarrollo del niño a lo largo del tiempo.

2.2.4. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

El Código Penal, título del Libro II señala los delitos contra el patrimonio abarcando el hurto, robo, estafa, receptación, apropiación ilícita, defraudación, extorsión, usurpación, daños,

¹³ Campos Bidart “El Interés Superior del Niño y la Protección Integral de la Familia como Principios Constitucionales” La Ley 1999 – F 623.

usura y quiebra. Según el especialista Rojas Vargas (2015) las características de delito patrimonial peruano: 1. Constituyen agresiones a diversos derechos que componen el bien jurídico patrimonio, derechos valorados económicamente y el vínculo entre una persona y los bienes o cosas, existen delitos que atacan el derecho de propiedad, posesión, el derecho a créditos, en algunos casos la simple tenencia o el goce de la cosa. 2. Generalmente afectan el interés patrimonial particular no comprendiendo el interés socioeconómico, financiero, tributario, propiedad industrial, etc., en el macro interés colectivo (social, estatal, global) la evidente naturaleza patrimonial no es tutelado en base al orden sistematizador y principal del bien jurídico patrimonio. 3. La mayoría de tipos básicos son contruidos en función a criterios de resultado. 4. En las formas agravadas del hurto, del robo y extorsión manifiesta gran criminalización, en contraposición ofrece mínima punición en los tipos básicos de daños, usurpación, receptación, defraudaciones, el hurto simple y de uso. 5. La construcción del tipo delictivo está en función del esquema básico y otro agravado, excepto los delitos de estafa y fraude en la administración de personas jurídicas. 6. La pena privativa de la libertad mínima es dos días (hurto de uso y contabilidad paralela) y un máximo de cadena perpetua (robo y extorsión agravados). 7. En forma general se define como aquel comportamiento humano que lesionan o ponen en peligro intereses económicos del sujeto pasivo del delito.

El Dr. Luis A. Bramont – Arias Torres (1994) señala que el concepto de patrimonio no presenta un contenido claro dada la imposibilidad de resolver todos los problemas que plantean estos delitos, mantiene diferentes posiciones que tratan de esclarecer su significado, tiene cuatro posiciones respecto del concepto de “patrimonio”:

- a) LA CONCEPCIÓN JURÍDICA DEL PATRIMONIO.-** El derecho privado o público lo reconoce como derechos patrimoniales subjetivos, posición en desuso, el Derecho Penal elabora sus propios conceptos pueden tener su origen en otras ramas del Derecho como el Derecho Civil.
- b) LA CONCEPCIÓN ECONÓMICA Estricta DEL PATRIMONIO.-** El patrimonio de una persona está constituido por todos valores económicos que le pertenecen a la persona, no importa que gocen de reconocimiento jurídico; los inconvenientes de esta posición a) No da importancia a las circunstancias del caso individual, tiene una visión puramente objetiva; b) Abarca los bienes en posesión antijurídica contradiciendo los principios rectores del Derecho.
- c) LA CONCEPCIÓN PATRIMONIAL PERSONAL.-** El concepto de patrimonio depende de la opinión del sujeto pasivo que recibe la infracción, posición retornada por OTTO (1991, pág.129) esta posición sobrevalora el momento subjetivo de la infracción que puede llevar a soluciones injustas porque no existe ningún parámetro de valoración. El doctor Salinas (2015) sostiene en proceso de elaboración que el patrimonio está constituido por los bienes posibles de ser valorados económicamente, reconocidos por el derecho y que contribuyen al desarrollo de la personalidad.
- d) LA CONCEPCIÓN MIXTA O JURÍDICO ECONÓMICA DEL PATRIMONIO.-** Actualmente la doctrina asume que el patrimonio está constituido por el total de los valores económicos puestos a disposición de una persona, bajo la protección del orden jurídico; los bienes ilícitos entran en la

concepción de patrimonio porque al adquirirse un bien ilícito éste pasa a formar parte del patrimonio de quien lo adquiere, se daría una relación de hecho que entraña un valor económico, siempre y cuando no sea frente al propietario; por consiguiente, este título señala la protección del patrimonio como bien jurídico asumiendo para definir dicho concepto la concepción mixta o jurídica económica del patrimonio.

El profesor Bramont-Arias (1994) señala según la doctrina, que los delitos patrimoniales pueden clasificarse en función de dos criterios:

1. Según se obtenga un determinado enriquecimiento:

- **Delitos de Enriquecimiento.**- El sujeto activo busca una ventaja patrimonial – hurto, estafa, apropiación indebida, y puede llevarlo a cabo a través de diferentes modalidades a través del apoderamiento (hurto, robo) o la defraudación, en la que se pone el acento en una determinada situación que se da entre sujeto activo y pasivo (engaño, confianza, etc.), distingue el ánimo de lucro que identifica el enriquecimiento, aunque en los hechos ese enriquecimiento puede no llevarse a cabo, por ejemplo, el sujeto se apodera de un ganado enfermo que, además de morir, destruye su propio ganado.
- **Delitos sin Enriquecimiento.** - El sujeto activo únicamente persigue un perjuicio del sujeto pasivo – daños-, es la más sencilla desde un punto de vista sistemático.

2. Según el objeto material sobre el que recae el

comportamiento típico:

- Delitos que recaen sólo sobre bienes muebles: hurto, robo, apropiación ilícita, receptación.
- Delitos que recaen sólo sobre bienes inmuebles: usurpación.
- Delitos que recaen sobre bienes muebles e inmuebles: estafa, extorsión, daños.

2.2.5. DISPOSICIÓN COMÚN - EXCUSA ABSOLUTORIA

El artículo 208° del C.P. señala los sujetos que no son reprimibles (sin perjuicio de la reparación civil) por hurto, apropiación, defraudación o daño que se causen:

- a. Los cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y afines en línea recta.
- b. El consorte viudo, respecto de los bienes de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de tercero.
- c. Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos.

La excusa absolutoria requiere que la infracción a la Ley Penal sea un hecho típico, antijurídico y culpable, la persona menor de edad en realidad infringe la ley, el delito puede quedar en grado de consumación o tentativa.

El profesor Bustos Ramírez señala que este artículo del CP. expone una excusa absolutoria al concurrir determinadas circunstancias personales que excluye la imposición de pena al delito cometido, enumera en sus tres incisos las personas beneficiadas por esta excusa absolutoria, tales personas

actúan como autores o partícipes en los delitos precisados por la Ley, no beneficia a terceros que intervengan en el hecho, aun cuando estos sean autores del hecho, por ejemplo si un extraño incurre en un delito de hurto y el hijo únicamente es cooperador de ese hurto, el extraño no se beneficia de la excusa absolutoria, pero sí el hijo, aunque sea meramente un cooperador, la excusa absolutoria exime de pena a estas personas pero no excluye la reparación civil a la que haya dado lugar el hecho, es decir, la responsabilidad civil permanece totalmente intacta; la sentencia no impondrá pena alguna, pero sí hará referencia a la responsabilidad civil que se tenga que exigir en cada caso sólo si el sujeto pasivo se constituyó como actor civil en el procesamiento, considerando que una vez constituido como sujeto procesal no podrá presentar demanda indemnizatoria en la vía civil, en este caso se pueda exigir la responsabilidad civil, dado que el sujeto consumó una acción antijurídica que se opone y daña el bien jurídico protegido.

2.2.6. LA MEDIDA SOCIO EDUCATIVA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EN EL DERECHO COMPARADO

La medida socioeducativa privativa de la libertad se aplica a determinada edad, los márgenes de edad que se definen en la legislación de la mayoría de los países vecinos coinciden en el rango de 12 a 18 años de edad, aplicados al amparo de un sistema especial y específico, excepcionalmente y proporcional por la comisión de delitos calificados como graves.

- a. **Bolivia**.- Código del Niño, Niña y Adolescentes, edad de ingreso al sistema penal juvenil es a los 12 años y la edad de ingreso al sistema penal de adultos es a los 16 años. La medida socioeducativa privativa de la libertad se fundamenta en que el delito debe tener una pena privativa

de la libertad igual o mayor a cinco años.

- b. **Brasil**.- Estatuto de la Niñez y la Adolescencia, la edad de ingreso al sistema penal juvenil es a los 12 años y la edad de ingreso al sistema penal de adultos es a los 18 años.
- c. **Costa Rica**.- Ley de Justicia Penal Juvenil, la edad de ingreso al sistema penal juvenil es a los 12 años y la edad de ingreso al sistema penal de adultos es a los 18 años.
- d. **Ecuador**.- Código de la Niñez y Adolescencia, la edad de ingreso al sistema penal juvenil es a los 12 años y la edad de ingreso al sistema penal de adultos es a los 18 años.
- e. **El Salvador**.- Código del Menor, la edad de ingreso al sistema penal juvenil es a los 12 años y la edad de ingreso al sistema penal de adultos es a los 18 años.
- f. **España**.- Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, la edad de ingreso al sistema penal juvenil es a los 14 años y la edad de ingreso al sistema penal de adultos es a los 18 años.
- g. **Honduras**.- Código de la Niñez, la edad de ingreso al sistema penal juvenil es a los 12 años y la edad de ingreso al sistema penal de adultos es a los 18 años.
- h. **Guatemala**.- Código de la Niñez y la Juventud, la edad de ingreso al sistema penal juvenil es a los 12 años y la edad de ingreso al sistema penal de adultos es a los 18 años.
- i. **Nicaragua**.- Código de la Niñez y la Adolescencia, la edad de ingreso al sistema penal juvenil es a los 13 años y la edad de ingreso al sistema penal de adultos es a los 18 años.

- j. **Panamá**.- Ley del Régimen Especial de Responsabilidad Penal, la edad de ingreso al sistema penal juvenil es a los 14 años y la edad de ingreso al sistema penal de adultos es a los 18 años.
- k. **Paraguay**.- Código de la Niñez y Adolescencia, la edad de ingreso al sistema penal juvenil es a los 14 años y la edad de ingreso al sistema penal de adultos es a los 17 años.
- l. **República Dominicana**.- Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, la edad de ingreso al sistema penal juvenil es a los 13 años y la edad de ingreso al sistema penal de adultos es a los 18 años.
- m. **Uruguay**.- Código de la Niñez y Adolescencia, la edad de ingreso al sistema penal juvenil es a los 13 años y la edad de ingreso al sistema penal de adultos es a los 18 años.
- n. **Venezuela**.- Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la edad de ingreso al sistema penal juvenil es a los 12 años y la edad de ingreso al sistema penal de adultos es a los 18 años.

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES

- o. **PERSONA MENOR DE EDAD**.- Condición jurídica de la persona que no ha alcanzado cierta edad señalada por la ley para su plena capacidad civil¹⁴, es una etapa de la vida del ser humano en que mayoritariamente rige la capacidad de goce, la plenitud, la capacidad de ejercicio, el menor es reconocido como sujeto activo de derechos, el Estado le garantiza protección integral en los procesamientos en los que este inmerso debiendo ser informado, consultado y escuchado,

¹⁴Fermín G. Chunga Lamónja "Comentarios al Código de los Niños y Adolescentes" Primera edición 2016.

respetando su intimidad y privacidad en todas las etapas.

p. **ADOLESCENTE INFRACTOR.**- La adolescencia¹⁵ es el periodo de la vida humana que sigue de la niñez y precede a la juventud¹⁶, la adolescencia es una etapa de la vida caracterizada por crecientes oportunidades, capacidades, aspiraciones, energía y creatividad, pero también por un alto grado de vulnerabilidad, los adolescentes son agentes de cambio, un activo y un recurso fundamental con potencial para contribuir positivamente a sus familias, comunidades y países¹⁷. El infractor en la legislación peruana hace alusión a una persona menor de edad responsable de la comisión de una infracción a la ley penal, nuestro sistema de responsabilidad penal para adolescentes tiene ámbito de aplicación subjetivo para las personas que se encuentran entre 14 y 18 años de edad al momento de realizar la conducta considerada infractora a la ley penal, reconociéndose la imputabilidad específica, condicionadas y diferenciada en referencia al hecho cronológico de la edad y al propio desarrollo del proceso formativo del menor que aún se observa inconcluso, el menor infractor cuya responsabilidad penal ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal aplicando una sanción designando la función punitiva del Estado para quien

¹⁵Comité de los Derechos del Niño, Observación general número 20(2016) sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia, numeral 5. El Comité reconoce que la adolescencia no es fácil de definir y que los niños alcanzan la madurez a diferentes edades. Los niños y las niñas entran en la pubertad a distintas edades, y diversas funciones del cerebro se desarrollan en diferentes momentos. El proceso de transición de la infancia a la edad adulta está influenciado por el contexto y el entorno, como se observa en la gran diversidad de expectativas culturales que hay en relación con los adolescentes en las legislaciones nacionales, que prevén distintos umbrales para comenzar a desempeñar actividades de la vida adulta, y en los diferentes órganos internacionales, que definen la adolescencia en función de diferentes franjas etarias. La presente observación general no pretende, por tanto, definir la adolescencia, sino que se centra en el período de la infancia que va desde los 10 años hasta que el niño cumple 18 para facilitar la coherencia en la reunión de datos.

¹⁶Diccionario de la Lengua Española, Edición del Tricentenario.

¹⁷Comité de los Derechos del Niño, Observación general número 20(2016) sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia, numeral 2.

trasgrede la ley, entendiendo que para determinar si es que estamos frente a un procesamiento de infracción a la ley penal se va a tener en cuenta la edad referida al momento de la comisión de los hechos.

- q. **LIBERTAD RESTRINGIDA.-** Es una sanción privativa de la libertad ejecutada en medio abierto a través de la asistencia y participación diaria y obligatoria del adolescente a programas de intervención diferenciada, con enfoque formativo educativo, que orientan y controlan sus actividades, cuya duración no es menor de seis meses ni mayor de un año.
- r. **INTERNAMIENTO.-** Es la privación de la libertad para recibir el tratamiento de rehabilitación en medio cerrado, consiste en el ingreso y tratamiento del adolescente infractor en un establecimiento adecuado con fines de custodia, tal ingreso no puede ser por un tiempo indefinido sino limitado, será la última medida, que aplicará el juez de familia de acuerdo a la gravedad de los hechos. La imposición de la internación comporta una facultad para el juez que la dicto y un deber para la autoridad del centro en el cual se encuentra internada el adolescente infractor.
- s. **LA FLAGRANCIA.-** Es la situación jurídica en la que se encuentra la persona menor de edad que fuera detenido cuando perpetra la infracción o detenido después de incurrir en la infracción o cuando al ser detenido se encuentra en posesión de los instrumentos utilizados en la comisión del delito o infracción; existen tres tipos de flagrancia¹⁸:
 - **Flagrancia estricta.-** Es el agente sorprendido cuando está realizando actos de ejecución propios del delito, o

¹⁸Javier Eduardo López Románf “La Flagrancia Delictiva como Instrumento Procesal de Lucha contra la Criminalidad” Escuela del Ministerio Público – 2015,

cuando acaba de consumarlo; el requisito de sorprender al agente no exige el asombro o sobresalto del mismo, se trata del descubrimiento de su acción delictiva en fase de ejecución o inmediatamente después de la misma; esta ha de producirse precisamente mediante la percepción sensorial del hecho, por parte del sujeto que dispone la detención, es decir, este ha de tener conocimiento del hecho a través de sus sentidos, especialmente visual. La percepción es totalmente actual, directa y efectiva y no se efectúa ninguna deducción, es decir el hecho advertido resulta vivo y palpitante.

- **Cuasiflagrancia.**- Se configura este supuesto cuando el agente ha ejecutado el delito, pero es detenido poco después, no se le perdió de vista después de la comisión del ilícito.
- **Flagrancia por identificación inmediata.** - El agente ha sido identificado como autor del hecho, se configura cuando el agente huyó y fue identificado al mismo tiempo o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible por el agraviado u otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. No habría inmediatez temporal y personal, pero hay evidencia fuerte de su autoría.

2.2.7. PRINCIPIOS DEL PROCESO

- a. **EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.**- Constituye un límite jurídico importante para todo acto de poder Estatal, sólo la ley puede

señalar que conductas son delictivas y cuál será la penas que se puede imponer a tales delitos, el Doctor Prado Saldarriaga expresa que en sentido material es una garantía de libertad personal y política de los ciudadanos, el expediente N° 08886-2006-HC a fs. 5 indica la subjetividad del derecho a la legalidad penal no puede estar al margen de los derechos protegidos por la justicia constitucional frente a supuestos relacionados a la elaboración judicial faltas o delitos, el supuesto agravado o inclusive aplicar determinados tipos penales bajo supuestos no contemplados en ellos. Por otro lado, la legalidad penal vinculada también a los magistrados y su eventual violación posibilita su separación mediante este tipo de procesos de tutela jurisdiccional de las libertades fundamentales¹⁹.

El CNA., artículo 189° establece que ningún adolescente podrá ser procesado ni sancionado (...) con medida socio-educativa que no esté prevista legalmente, ni castigado con una sanción más grave que la aplicable al tiempo de haberse cometido la infracción penal, con el transcurso del tiempo para la misma infracción se prevé una sanción más leve, el menor se beneficiará con dicho cambio.

- b. EL DEBIDO PROCESO.-** Es una garantía procesal de los derechos humanos y de principios establecidos en la función jurisdiccional, protege los derechos concedidos a las partes y a sus defensores respecto de la autoridad; expresada en los artículos 10° y 11° de la Declaración de Derechos Humanos, artículo 18° y 26° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 4°, 14° y 15° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo

¹⁹Raúl Chanamé Orbe "Diccionario Jurídico Moderno – Conceptos Institucionales" Editorial Adrus Octava Edición, pág. 379.

8°, 9°, 10° y 27° de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 37° y 40° de la Convención de los Derechos del Niño, y en el inciso 3° del artículo 139° de la Constitución señalan que los procesamientos judiciales y administrativos están sujetos a la garantía del debido proceso, prestando especial atención a la presunción de inocencia, la informar sin demora y directa de los cargos imputados, la asistencia jurídica o social apropiada, la participación directa de los padres, respeto a la vida privada y a la imparcialidad del procesamiento²⁰.

c. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA.- La Convención Derechos del Niño, artículos 37° literal b, 40.3.b) y 40.4²¹, refiere que la sanción privativa de la libertad a un menor de edad es una medida de última recurso, impuesta por el más breve plazo que proceda, priorizando adoptar otras alternativas al internamiento para el tratamiento de niños o adolescentes frente a la comisión de una infracción a fin de evitar la promoción de procedimientos judiciales, respetando las garantías y derechos fundamentales; la observancia de este principio busca disminuir los efectos negativos que puede involucrar el normal desarrollo de un niño tanto en el aspecto físico, psicológico y social.

d. PRINCIPIO DE ESPECIALIZACIÓN.- Se expresa en la aplicación de la Justicia especializada, es una pretensión estatal cuyo fundamento es el reconocimiento del menor como sujeto de derechos y por lo tanto orientada a hacer realidad la

²⁰Juan Carlos García Huayama "Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú" Editorial Lex & Iuris. Lima diciembre 2016, pág. 33-34.

²¹Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 40° literal b. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción; en el citado documento se emplea la frase menores delincuentes, sin embargo en la legislación peruana se considera como menores en estado peligroso, en razón que hasta los 18 años se consideran inimputables, sin responsabilidad penal.

igualdad ante la ley, proporcionando al juez así como a las partes procesales los mecanismos necesarios para lograr una decisión justa, dentro de lo humanamente posible²². El Comité brinda relevancia al término “tribunales” porque abarca a todos los procedimientos judiciales de toda instancia, integrados por magistrados profesionales o personas que no lo sean, y todas las actuaciones conexas relacionadas con niños, sin restricción alguna, incluyendo los procesos conciliatorios, mediación y arbitraje²³.

e. PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD.- La privación de la libertad constituye una medida cautelar alternativa, excepcional, limitada en el tiempo que es aplicada eventualmente en casos de ilícitos muy graves, la excepcionalidad en la imposición del internamiento respeta las normas internacionales que regulan y concuerdan con la normatividad interna del Estado estableciendo parámetros para su utilización, la aplicación de la privación de la libertad se justifica como última ratio, solamente será aplicar cuando es indispensable y necesaria en el procesamiento.

f. EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.- Basada en el contacto directo entre las partes y el juez que practica las pruebas en las que se ha de fundamentar la emisión de la sentencia, debe mantener contacto y comunicación directa con el menor que ha infraccionado la ley con la finalidad de que pueda adquirir de manera directa los elementos de juicio necesarios para motivar la sentencia²⁴.

²²Fernando R. Carbonell Lazo “Manual de Derechos de los Niños y Adolescentes” – Ediciones Jurídicas Lima Perú 2010, pág. 287 y ss.

²³Comité de los Derechos del Niño. Observación General número 14(2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, artículo 3, párrafo 1, numeral 27.

²⁴Raúl Chanamé Orbe “Diccionario Jurídico Moderno – Conceptos Institucionales” Editorial ADRUS Octava Edición, pág. 344.

2.2.8. GARANTIAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO

El CP. en el numeral 2 del artículo 20° expresa que “el menor de 18 años está exento de responsabilidad penal” atribuyéndole una responsabilidad atenuada valorando su etapa de desarrollo, condición jurídica que ha de ser cuidada por la familia, el Estado y la sociedad. El poder punitivo estatal interviene en aquellos actos infractorios que atenten gravemente los bienes protegidos jurídicamente, la intervención ha de ser útil y menos gravosa respetando los intereses de los menores, orientada a la reeducación, rehabilitación y reincorporación de este segmento de población vulnerable a la sociedad, en la vía penal el interés superior es aplicada a los menores infractores de la ley (presuntos autores, acusados o condenados) o en contacto con ella (como víctimas o testigos), y los niños afectados por la situación jurídica de unos padres.

El doctor García Huayama, J. y la doctora Alvarado Reyes, J. (2014) señalan que las garantías son²⁵:

- a. Abolición de la pena de muerte.
- b. Poca duración e improrrogabilidad del internamiento.
- c. No existe publicidad del juicio oral.
- d. Participación de los padres o responsables mientras de desarrolla el proceso.
- e. Inclusión de estudios psico sociales.
- f. Variado catálogo de medidas socio educativas.
- g. Inclusión de alternativas de naturaleza

²⁵El Internamiento Preventivo en el Sistema Penal Peruano, aspectos legales y doctrinarios del sistema de justicia penal juvenil. Primera edición, 2014, pág. 35-39.

desjudicializadora.

Los derechos procesales que le asisten al menor son: acceder a la justicia, asistencia legal adecuada, impugnar la legalidad del internamiento ante un tribunal competente e imparcial será un acto revestido de legalidad.

2.2.9. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL

La infracción contra el patrimonio en sus diversas modalidades - hurto simple y agravado, hurto de uso, robo simple y agravado, abigeato, apropiación ilícita, receptación, estafas y otras defraudaciones, extorción y chantaje, usurpación y daños – se analiza los elementos del delito: la conducta, la tipicidad, antijuricidad, responsabilidad y como consecuencia se aplica la medida socio educativa. 1. El profesor L. Bramont (2008) manifestó que el tipo penal analiza la descripción de la conducta prohibida (cumpliendo una función seleccionadora, garantía, indiciaria y motivadora) y la tipicidad, adecua el hecho al tipo penal, tiene dos aspectos: tipo objetivo que analiza las características en el mundo exterior - el bien protegido jurídicamente, los sujetos, la relación de causalidad, la imputación objetiva, los elementos descriptivos y los elementos normativo; y tipo subjetivo que investiga el aspecto psicológico del autor - analizando el dolo y la culpa, así como el error de tipo excluye el dolo). 2. La Antijuricidad presenta dos clases: a) Formal verifica si la conducta típica contraviene el orden jurídico, b) Material verifica si la conducta típica lesionó o puso en peligro el bien protegido jurídicamente. 3. El profesor R. Salina (2015) indica que la responsabilidad se determina cuando la conducta es atribuible al autor, excluyéndonosla cuando el sujeto tiene alteración en la percepción de la conciencia o desconocía la antijuricidad de su conducta (error de prohibición). La inimputabilidad es causa

exculpante para los niños se verifica esta condición en razón de su edad, luego se determina la consumación del hecho o si no se perfecciona y queda en grado de tentativa, el niño que al momento de incurrir en el hecho delictivo tienen menos de 14 años son pasibles de una medida de protección – tutelar y no son sometidos al proceso por infracción.

El estudio detallado del Expediente N° 1026/16 perteneciente al Segundo Juzgado de Familia de Ventanilla relata un acto infractor que atribuye a los adolescentes la infracción contra el patrimonio - robo agravado en grado de tentativa:

- a) **Situación Jurídica Inicial:** Detención en Flagrancia delictiva – Internamiento preventivo durante el procesamiento.
- b) **Medida Socio educativa Aplicada:** Privación de la libertad – Sentencia condenatoria que dispuso el Internamiento de los adolescentes infractores por veinticuatro meses.
- c) **Base legal:** Código Penal Peruano.
- d) **Base procedimental:** Código del Niño y Adolescente y supletoriamente aplica el Código Procesal Penal.
- e) **Institución a cargo de Aplicar la Medida:** Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Lima – Ex Maranguita.
- f) **Hecho típico:** La infracción descrita está comprendida dentro del CP. según fecha de investigación, artículo 189° y el artículo 188° del citado.
- g) **Hechos atribuidos:**

• **Fundamentación Fáctica.-** El Ministerio Público

formalizó denuncia, el 30 de setiembre del 2016, se les imputa a los adolescentes ser responsables de la comisión de robo agravado en grado de tentativa, se les imputa haberse apoderado de bienes mueble del agraviado consistente en un celular, mascarilla de auto radio y cincuenta nuevos soles, bienes sustraídos con uso de la violencia, hecho realizado por los dos adolescentes conjuntamente con una persona mayor de edad, el hecho ocurrió el día 30 de setiembre del año 2016 a las 11:30 horas, momento que el agraviado se encontraba realizando el servicio de taxi desde el centro de Ventanilla hacia Pachacutec, transportó al adulto y a uno de los adolescentes, al estacionarse el ocupante de la parte posterior de la unidad agarró del cuello al agraviado conjuntamente con persona mayor de edad, empieza el forcejeo, mientras el adolescente que se encontraba en el lugar de llegada provisto de un desarmador hincó en la barriga al agraviado, en estas circunstancias se apoderan de los bienes del agraviado para luego darse a la fuga y horas más tarde ser ubicados por la Policía Nacional y conducidos a la comisaría.

• **Trámite.** - Promover la acción penal por robo agravado en grado de tentativa, condición procesal de los menores - internamiento preventivo; el cuatro de noviembre del dos mil dieciséis se realizó la audiencia de esclarecimiento de los hechos, primer menor se acogió al beneficio de la confesión sincera, el informe multidisciplinario señala que se encuentra tranquilo, colaborador y que cuenta con soporte familiar, no tiene antecedentes por infracciones anteriores y el hecho fue calificado como tentativa, el abogado de la defensa solicita aplicar libertad restringida;

el segundo menor acepto su responsabilidad, el informe multidisciplinario indica que hay poco control de los padres, la madre en la audiencia señala que su hijo no tiene antecedentes por infracciones anteriores, la defensa expone que el hecho fue en grado de tentativa solicita una oportunidad y se brinde libertad restringida. El Ministerio Público en su dictamen de ley señala que se encuentra acreditada la infracción como coautores solicita se imponga la medida socio educativa de internamiento y solicita el pago de la reparación civil valorada en quinientos nuevos soles.

Considerando:

La pena supone en primer lugar el examen de las pruebas actuadas a fin de determinar los hechos probados, la precisión la normativa aplicable y la subsunción de los hechos en la norma, con el objetivo de determinar la medida socio educativa, en consecuencia, se tiene:

•**Apreciación valorativa de los hechos.**- Se considera un extracto de las declaraciones de los sujetos procesales y de tres testigos, se valora las pruebas presentadas: Informe policial, cinco declaraciones (parte agraviada, los testigos y el investigado mayor de edad – dieciocho años), dos manifestaciones referenciales, acta de intervención, cuatro certificados médicos de los investigados, tres actas de perenización. Estando al ilícito de robo agravado que sanciona el ilegítimo apoderamiento de un bien mueble, parcial o totalmente ajeno para aprovecharse de él, para ello lo sustrae del lugar donde se ubica, utilizando la violencia hacia la persona o amenazando con infligir un

peligro inminente hacia su vida o integridad física; en el caso concurren agravantes como el haber actuado en un lugar desolado, a mano armada, en un medio de transporte público o privado de pasajeros y sobre vehículo automotor, sus autopartes o sus accesorios, luego de haber realizado una valoración factica y pruebas actuadas, se tiene probado la comisión del hecho infractor por partes de los menores de edad, en base a los siguientes elementos de prueba: 1. La declaración del agraviado a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, b) Verocimilitud, c) Persistencia de la incriminación. 2. Declaración de los adolescentes investigados.

h. Juicio de Subsunción

• **Tipicidad:** La conducta de los adolescentes es subsumida dentro de las infracciones contra el patrimonio en el tipo de robo agravado previsto en el artículo base 188°, con los agravantes previstos en los numerales 2), 3), 5) y 8) del artículo 189° del CP. aplicado en la fecha de estudio. El delito de robo tiene como verbo rector el apoderamiento²⁶, el mismo que para nuestra ley se inicia necesariamente con la sustracción del bien, esto es, desplazándolo de la esfera de custodia en que se encontraba a otro en el cual es el sujeto activo quien tiene el poder sobre el bien (esfera de dominio). Asimismo, supone ejerciendo violencia²⁷ o amenaza sobre las personas, así la violencia se encuentra en la propia acción ejecutiva, modalidad en que esta acción se encuentra vale decir forma de proceder a la sustracción del bien ajeno, ahí radica la diferencia de la infracción por Robo

²⁶Situación en la que el sujeto activo logra hacerse de la posesión ilegítima del bien mueble total o parcialmente ajeno en perjuicio de su titular a quien como es obvio se le priva del ejercicio de sus derechos.

²⁷Existe violencia cuando se aplica una energía física destinada a vencer la resistencia de la víctima (sic) Raúl Peña Cabrera, Derecho Penal Parte Especial, Tomo II, editorial IDEMSA, 2010, pág. 70.

Agravado con el empleo de la violencia hacia la persona o amenazando con infligir un peligro inminente hacia su vida o integridad física ejercidos con el objetivo de vencer la resistencia de la víctima y lograr así apoderarse del bien ajeno. En cuanto a la coautoría, configura cuando se advierte los requisitos objetivos tales como la realización común y aporte necesario; y, subjetivos como decisión común.

La resolución hace referencia al maestro Zaffaroni, señalando que será coautor el que realice un aporte que sea necesario para llevar adelante la acción de la manera como fue planeada, sin la ejecución de ese aporte necesario en la etapa ejecutiva, el plan se hubiese frustrado. La coautoría está regida fundamentalmente por la imputación recíproca y sus requisitos son decisión común (requisito subjetivo) determinando la conectividad de las partes del hecho llevado a cabo por distintas personas, en otras palabras, el acuerdo de voluntades, luego se tiene la realización común (requisito objetivo) que se fundamenta principalmente en el trabajo que a su vez se fundamenta en dos aspectos: plan común y contribución objetiva a la realización del hecho; además cada autor complementa con su parte en el hecho la de los demás formándose un todo unitario, realizando en la etapa de los actos de ejecución²⁸, en consecuencia se aprecia que los adolescentes serían coautores del ilícito. El grado de ejecución de la infracción, actualmente se acepta de manera general que la consumación se produce en el instante en el cual el sujeto activo dispone del bien, esto es cuando el agente logra y tiene la

²⁸James Reategui Sánchez, Derecho Penal Parte General, Gaceta Jurídica S.A. Lima – 2009, pág. 418/419.

posibilidad de disposición sobre el bien mueble sustraído, si no hay disposición del bien no hay consumación, existiendo sólo la tentativa, por ende en este caso el grado de consumación de la infracción es la tentativa.

La Sentencia Plenaria N°01-2005/DJ-301-A, expresa que las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República establecieron como precedente vinculante que para la consumación del delito de robo agravado se requiere de la disponibilidad de la cosa sustraída por el agente. Disponibilidad que, más que real y efectiva debe ser potencial, esto es entendida como la posibilidad material de disposición o realización de cualquier acto de dominio de la cosa sustraída.

• **Antijuricidad.** - La conducta típica resulta antijurídica, considerando que en el presente caso no se ha acreditado la concurrencia de alguna causal de justificación como legítima defensa o estado de necesidad de los infractores.

• **Culpabilidad.**- El artículo 20° inciso 2 del CP. establece que la persona menor de edad - dieciocho años está exento de responsabilidad penal, concordante con la norma establecida en el CNA., significa que el menor infractor tiene una responsabilidad distinta a la del adulto a la que se llega luego de un debido proceso, por lo que en el presente caso habiéndose verificado la existencia de alguna de las causales de inculpabilidad determinadas en base a la verificación de su capacidad de responsabilidad al no sufrir ningún tipo de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o alteración de la percepción que lo haga imputable, y, dado su nivel cultural y sentido

común conocía que su conducta estaba prohibida por el orden jurídico por ser contrario a derecho, pudiendo actuar de modo diferente al momento de producirse los hechos denunciados, concurriendo el requisito de culpabilidad requerido por el orden jurídico.

•Juicio de Valoración de la Condición psico social de los Investigados.- El Informe Multidisciplinario del primer menor señala consumo de riesgo sustancias psicoactivas, recomienda intervención psicoterapéutica, reestructuración cognitiva, fomentar valores, orientación y consejería familiar.

El Informe multidisciplinario del segundo adolescente señala que se ubica dentro de la categoría intelectual superior al término medio, existe negligencia de los padres, menor emocionalmente inestable, dinámica familiar reconstituida disfuncional, menor en riesgo individual y social, no presenta factores de protección y soporte familiar, se recomienda intervención psicosocial, insertarlo al medio escolar.

•Juicio de Valoración de imputación Personal.- La Secretaría Genrl. de la Corte Superior Justicia de Ventanilla informó que los adolescentes investigados no registran anotación alguna dentro del Sistema de Medidas socioeducativas de dicha Corte.

• Determinar la Medida Socio Educativa.- El juzgador establece un marco punitivo que abarca las circunstancias atenuantes - agravantes correlacionados con los principios de legalidad, proporcionalidad, lesividad y culpabilidad, considerada la ley N° 30076 robo agravado pena no menor de doce ni mayor de veinte años, aunado

a las circunstancias personales de los adolescentes, la medida adoptada está basada en el examen de la gravedad del hecho, las circunstancias que rodean la comisión del mismo y las características personales que rodean a los menores, priorizando los casos que estén sujetos a resolución judicial los que estén involucrados niños y adolescentes son tratados como problemas humanos, correspondiendo al caso de autos imponer una sanción con duración por debajo del mínimo legal.

•**Fundamentación de la reparación civil.-** Debe fijarse prudencialmente en atención de los bienes vulnerados, no sólo el tema patrimonial sino también es valorada la amenaza a la integridad psicofísica del agraviado.

i Resuelve

La presunta infracción penal contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en el grado de tentativa la medida privativa de la libertad por veinticuatro meses, fija la reparación civil en quinientos nuevos soles a favor del agraviado.

2.4. HIPÓTESIS

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL

La medida socio educativa privativa de la libertad aplicada a los adolescentes infractores contra el patrimonio en el Distrito Judicial de Ventanilla tiene como fundamento la dogmática, doctrina, jurisprudencia, normativa nacional e internacional sobre la materia y la doctrina comparada.

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA

HE 1: La normativa que consideran los magistrados para fundamentar y motivar la medida socioeducativa de internamiento a los adolescentes que infringen la ley penal en el Distrito en el decurso del periodo 2016 es la Constitución Política del Perú, El Código Penal, Código de los Niños y Adolescentes, los modelos de justicia de menores, la Convención, Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores – Reglas De Beijing, Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil – Directrices de Riad, Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad – Reglas de la Habana.

HE 2: Los requisitos para aplicar la medida socioeducativa de internamiento en el Distrito son que el acto infractor doloso este sancionado con pena privativa de la libertad mayor a cuatro años, que exista reiteración (reincidencia o habitualidad) en la consumación de infracciones graves, incumplimiento injustificado reiterado de la medida socio educativa impuesta y flagrancia delictiva.

HE 3: La relevancia cuantitativa de las infracciones contra el patrimonio registrada en los juzgados del Distrito durante el periodo 2016 es mayor en comparación a otros tipos penales.

HE 4: El robo agravado es la infracción contra el patrimonio que registra mayor incidencia en los juzgados del Distrito durante el periodo 2016.

2.5. VARIABLES

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (X):

Los adolescentes infractores en los delitos contra el patrimonio.

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE (Y):

La Medida socioeducativa privativa de la libertad.

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADOR	TECNICA INSTRUMENTAL
(X) Los adolescentes infractores en los delitos contra el patrimonio.	Sanción aplicable regulada en el Código de los Niños y Adolescentes.	Establece los alcances de las sanciones a los adolescentes infractores en los delitos contra el patrimonio.	Revisión documental.
	Estructura del tipo penal regulación en el Código Penal y Procesal Penal.	Establece los alcances de las sanciones a los adolescentes infractores en los delitos contra el patrimonio.	Revisión documental.
	Regulación en normas internacionales conexas.	Establece los alcances de los principios y garantías inherentes a las personas menores de edad.	Revisión documental.
	Regulación Jurisprudencial conexas	Establece los alcances de las sanciones a los adolescentes infractores.	Revisión documental.
(Y) La Medida socioeducativa privativa de la libertad.	Tratarse de un acto infractor doloso sancionado con una pena superior a los cuatro años.	Señalado en la sentencia.	Ficha.
	Circunstancia agravante de la infracción, Reiteración en la comisión de infracciones graves.	Señalado en la sentencia.	Ficha.
	Incumplimiento injustificado y reiterado de la medida socioeducativa impuesta.	Señalado en la sentencia.	Ficha.
	Flagrancia en las infracciones contra el patrimonio.	Señalado en la sentencia.	Ficha.

CAPITULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Investigación aplicada que busca identificar el problema identificado, la investigación parte de los conocimientos generados en la investigación básica, con un enfoque cuantitativo, ya que está dirigida a la revisión, análisis y estudio de casos ventilados en el D.J. Ventanilla en el 2016, respecto a procesos iniciados por la comisión de delitos contra el patrimonio por parte de adolescentes infractores.

3.2. ALCANCE O NIVEL

Nivel descriptivo porque describirá las diferentes características, aspectos y dimensiones del objeto de la presente investigación.

3.3. DISEÑO

Por la naturaleza de la presente investigación nos localizamos dentro del diseño no experimental, investigación sistemática que no manipula la variable independiente.

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

- 3.4.1. POBLACIÓN.** - Comprende la totalidad de sentencias emitidas en el D.J. Ventanilla en el recorrer del año 2016, resoluciones de sentencia que cumplen con el criterio incluyente y excluyente, procesos de investigación en los que fueron sujetos activos

adolescentes menores de edad por la comisión de actos infractorios.

- 3.4.2. MUESTRA.** - La muestra de estudio estuvo constituida por sentencias emitidas en el D.J. Ventanilla por Infracción a la ley penal en el decurso del año 2016, en los procesamientos iniciados por la comisión de delitos contra el patrimonio por parte de adolescentes infractores, que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. No se calculó tamaño de muestra ya que toda la población de estudio formó parte de la muestra.

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

El enfoque de la investigación usó los instrumentos y técnicas para recolectar datos como:

- 3.5.1. ESTUDIO DE CASO.** – La técnica de recolección de información, seleccionar los casos apropiados y realizar el estudio detallado del contexto acorde a la estrategia adoptada por la investigadora.

3.5.2. ANÁLISIS DOCUMENTAL.-

Recopilar los datos y verificar los indicadores de las variables propuestas para la investigación.

3.6. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Las etapas que constituyen el proceso y análisis de la información recopilada en la presente investigación son: 1) Revisión y organizar de los datos, 2) Clasificación y compilación de datos y 3) Presentación estadística mediante gráficos y tablas.

3.7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Casos vinculados a procesamientos en materia familia penal

que cuentan con sentencia firme y calidad de cosa juzgada.

3.8. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Casos con sentencias que hayan sido impugnadas y estén en trámite. Casos que a criterio del órgano jurisdiccional tengan carácter de reservado o no puedan formar parte del estudio.

CAPITULO IV

RESULTADOS

4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS

Los datos se han obtenido en base a la información recopilada de los expedientes que obran en la Corte Superior de Justicia D.J. Ventanilla así como del Sistema de Registro Informático del Poder Judicial, datos recopilados en las fichas de investigación que forman parte de la muestra según formato, el estudio detallado de la información se realiza en base a estadística descriptiva e inferencial conforme siguiente detalle:

Cuadro N°1

¿Cuántos Expedientes por Infracción Contra el Patrimonio fueron resueltos durante el año 2016?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	2015	13	54,2	54,2	54,2
	2016	11	45,8	45,8	100,0
	Total	24	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 1



Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

En el D.J. Ventanilla en el decurso del año 2016 se resolvieron 24 procesos por infracción Contra el Patrimonio, de los cuales 13 expedientes corresponden a casos formalizados durante el año 2015 representando el 54.17%; y 11 casos corresponden a formalizaciones del año 2016 representando el 45.83% del total.

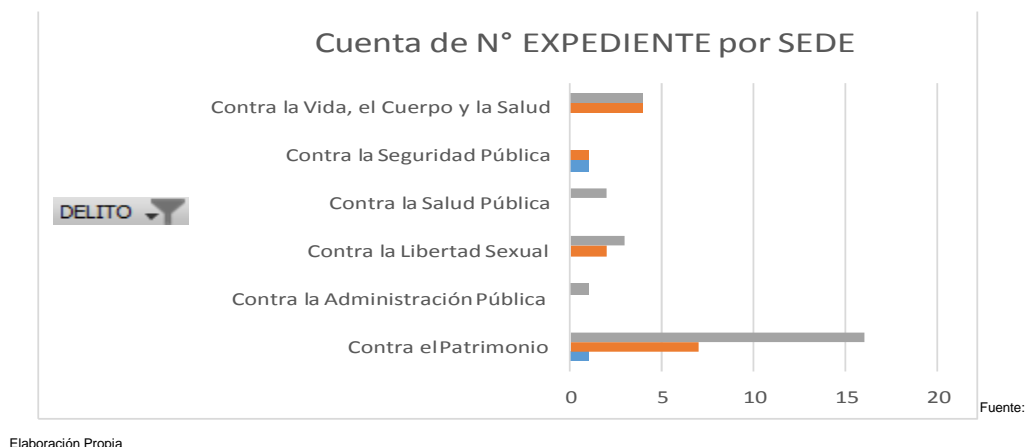
Cuadro N° 2

¿Cuál es la cantidad de casos formalizados por infracción a la Ley Penal durante el año 2016?

DELITO	Ancón y Santa Rosa Mi Perú Ventanilla		
Contra el Patrimonio	1	7	16
Contra la Administración Pública			1
Contra la Libertad Sexual		2	3
Contra la Salud Pública			2
Contra la Seguridad Pública	1	1	
Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud		4	4
Fuentes: Fichas de Investigación - Sistema Integrado Judicial SIJ Poder Judicial			

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 2



Interpretación:

En el gráfico se evidencia que en el D.J. Ventanilla en el decurso del año 2016 se formalizaron 43 investigaciones por actos infractorios la Ley Penal, de este total las infracciones al patrimonio registran un total de 24 casos, seguido de las infracciones contra la vida el cuerpo y la salud que muestran un total de 08 casos, las infracciones contra la libertad sexual son en total 05 casos, las infracciones contra la salud pública tipo tráfico ilícito de drogas micro-comercialización son 02 casos, las infracciones contra la seguridad pública son 02 casos y 01 caso por infracción contra la Administración Pública tipo violencia y resistencia contra la autoridad.

4.1.1. ¿Cuáles son las normas que utilizan los magistrados para fundamentar y motivar la medida socio educativa de internamiento?

Las normas que los magistrados enuncian en la motivación de las resoluciones de sentencia son:

- a. La Carta Magna del Perú.
- b. El Código de los Niños y Adolescentes CNA.

- c. El Código Penal C.P.
- d. El Código Procesal Penal C.P.P., aplicación supletoria.
- e. Ley N°30076 Ley que modificó el C.P. Código Penal, C.P.P. Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y el C.N.A. Código de los Niños y Adolescentes, Crea los Registros y Protocolos con la Finalidad de Combatir la Inseguridad Ciudadana.
- f. El Interés Superior del Niño.
- g. Convención sobre los Derechos del Niño.
- h. Jurisprudencia sobre materia familia penal.

4.12 ¿Cuáles son los requisitos para aplicar la medida socioeducativa de internamiento?

- a. Internamiento:

La medida socioeducativa aplicada debe ser proporcional a las circunstancias, la gravedad del hecho, la edad y las necesidades del menor, así como a las necesidades sociales.

- b. El Internamiento Preventivo requiere:

1. La existencia de suficientes medios de convicción y pruebas que vinculen al menor de edad como autor o partícipe en la perpetración del acto infractor.
2. Riesgo razonable de que el menor de edad tratará de eludir o sustraerse del proceso.
3. Temor fundado de la obstaculización de los medios de pruebas o destrucción de los mismos.

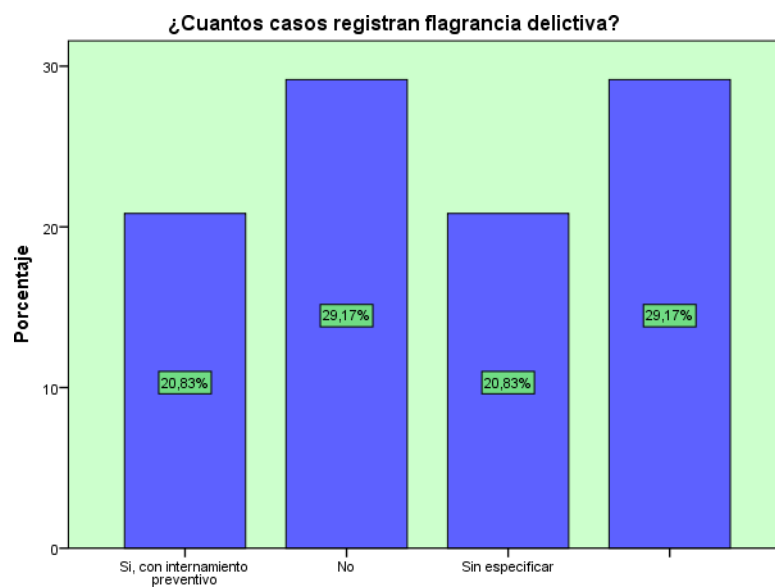
Cuadro N° 3

¿Cuántos casos registran flagrancia delictiva?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	7	29,2	29,2	29,2
Si, con internamiento preventivo	5	20,8	20,8	50,0
No	7	29,2	29,2	79,2
Sin especificar	5	20,8	20,8	100,0
Total	24	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Grafico N° 3



Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

En la representación se tiene que del total de casos formalizados por actos infractorios a la ley penal los expedientes que registran internamiento preventivo del adolescente menor de edad por

flagrancia delictiva son cinco 05 casos que representan el 20.83% del total.

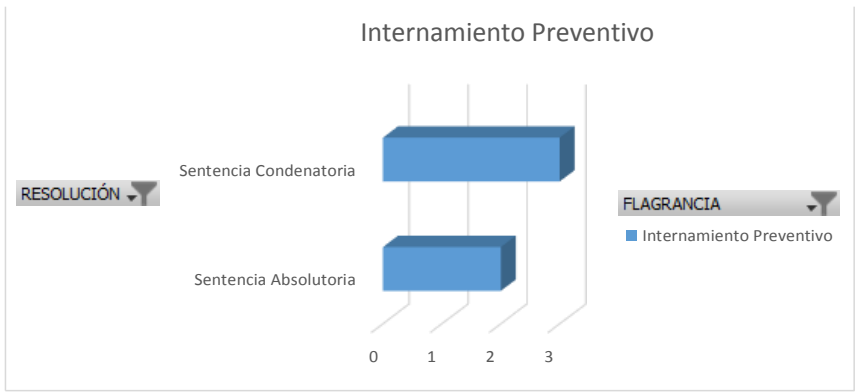
Cuadro N° 4

El internamiento preventivo ¿Cuál fue el resultado de la sentencia?

Etiquetas de fila	Internamiento Preventivo Total general		PORCENTAJE
Sentencia Absolutoria	2	2	8.33%
Sentencia Condenatoria	3	3	12.50%
Total general	5	5	20.83%

Elaboración Propia

Gráfico N° 4



Fuente: Elaboración Propia

Interpretación:

De la totalidad de casos se registran 05 expedientes que consignan resoluciones determinando la detención preventiva del adolescente infractor por hallarse en situación de flagrancia, 02 casos registran resolución de sentencia absolutoria determinando la libertad de la persona menor de edad representando el 8.33% del total y 03 casos obtuvieron sentencia condenatoria situación que determina el internamiento del adolescente infractor representando el 12.50%.

4.13. ¿Cuál es la relevancia cuantitativa de las infracciones contra el patrimonio en los Juzgados del D.J. Ventanilla durante el periodo 2016?

Cuadro N° 5

¿Cuál es la cantidad de casos judicializados por infracción Contra el Patrimonio en las sedes del D.J. Ventanilla?

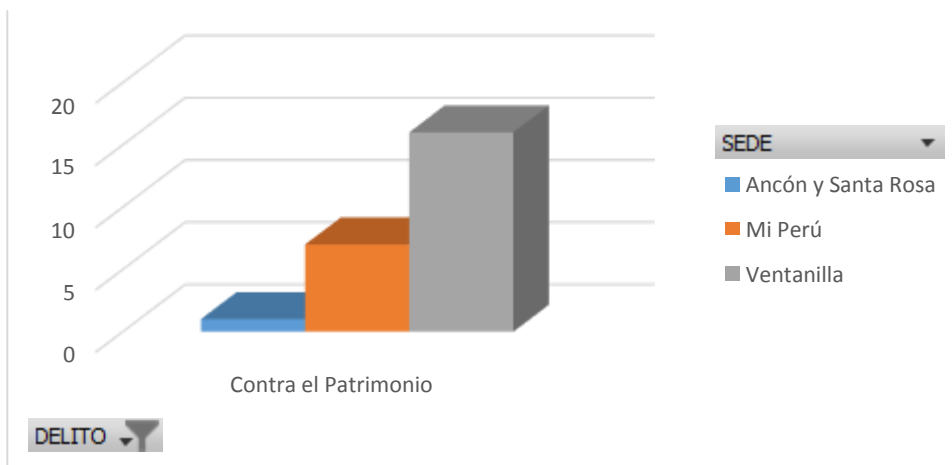
Etiquetas de fila	Ancón y Santa Rosa	Mi Perú	Ventanilla	Total general
Contra el Patrimonio	1	7	16	24
Total general	1	7	16	24

Fuentes: Fichas de Investigación - Sistema Integrado Judicial SIJ Poder Judicial

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 5

Casos judicializados por infracción Contra el Patrimonio en las sedes del Distrito Judicial de Ventanilla



Fuente: Elaboración Propia

Interpretación:

En el gráfico se aprecia (24) casos judicializados por infracciones contra el patrimonio en el D.J. Ventanilla, de este total se registraron (07) casos en la sede Mi Perú, (01) caso en la sede Ancón Santa Rosa y 16 casos en la sede Ventanilla, siendo este

último el Distrito que mayor incidencia presenta por este tipo de infracciones.

Cuadro N° 6

¿Cuál es la cantidad de sentencia emitidas por infracción Contra el Patrimonio en las sedes del Distrito Judicial de Ventanilla?

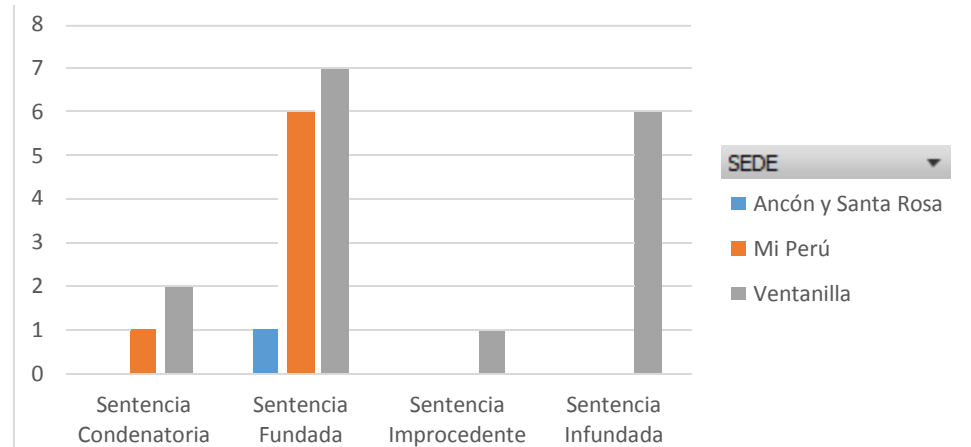
Etiquetas de fila	Ancón y Santa Rosa	Mi Perú	Ventanilla	Total general	PORCENTAJE
Sentencia Condenatoria		1	2	3	12.50%
Sentencia Fundada	1	6	7	14	58.33%
Sentencia Improcedente			1	1	4.17%
Sentencia Infundada			6	6	25.00%
Total general	1	7	16	24	100.00%
PORCENTAJE	4.17%	29.17%	66.66%	100.00%	

Fuentes: Fichas de Investigación - Sistema Integrado Judicial SIJ Poder Judicial

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 6

Sentencias emitidas por infracción Contra el Patrimonio en las sedes del Distrito Judicial de Ventanilla



Fuente: Elaboración Propia

Interpretación:

El gráfico muestra que del total de casos por infracción a la ley penal el D.J. Ventanilla registro la emisión de 03 sentencias condenatorias que representan el 12.50%, 14 sentencias

declaradas fundadas que representa el 58.22%, 01 sentencia declara improcedente indicando la reserva de la situación jurídica del adolescente y 06 sentencias declaradas infundadas representando el 25% del total.

Cuadro N° 7

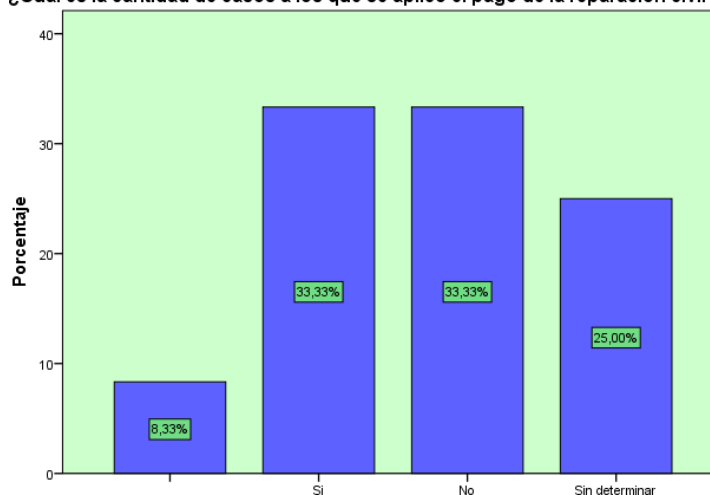
¿Cuál es la cantidad de casos a los que se aplicó el pago de la reparación civil?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	2	8,3	8,3	8,3
Si	8	33,3	33,3	41,7
No	8	33,3	33,3	75,0
Sin determinar	6	25,0	25,0	100,0
Total	24	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 7

¿Cuál es la cantidad de casos a los que se aplicó el pago de la reparación civil?



Fuente: Elaboración Propia

Interpretación:

El gráfico evidencia que de la totalidad de sentencias emitidas por actos que infraccionan la ley penal en ocho (08) casos se verifica la resolución que dispone el requerimiento del pago de la reparación civil a la parte infractora a favor del agraviado.

Cuadro N° 8

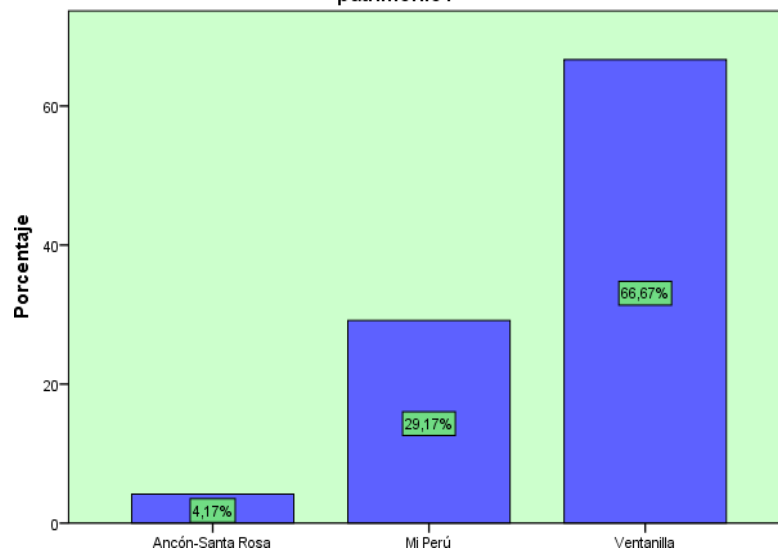
¿Cuál es la sede que registra mayor incidencia de infracciones contra el patrimonio?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido Ancón-Santa Rosa	1	4,2	4,2	4,2
Mi Perú	7	29,2	29,2	33,3
Ventanilla	16	66,7	66,7	100,0
Total	24	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Grafico N° 8

¿Cuál es la sede que registra mayor incidencia de infracciones contra el patrimonio?



Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

El gráfico evidencia que la sede de los Juzgado de Familia de Ventanilla registran mayor cantidad de expedientes formalizados por infracciones Contra el Patrimonio haciendo un total de 16 casos que representan el 66.67% del total de procesamientos incoados por actos que infraccionaron la ley penal.

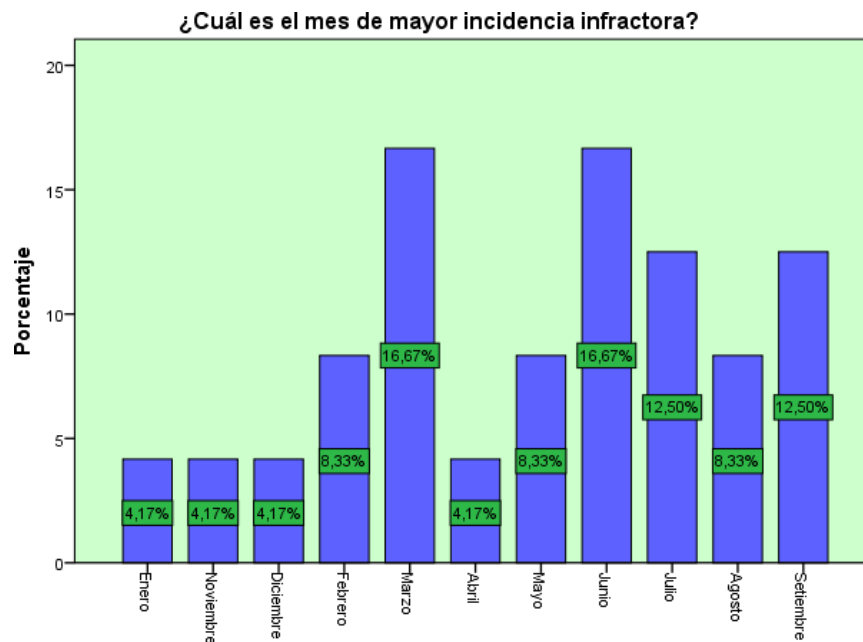
Cuadro N° 9

¿Qué mes registra una mayor cantidad de expedientes formalizados por infracción Contra el Patrimonio?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Enero	1	4,2	4,2	4,2
	Noviembre	1	4,2	4,2	8,3
	Diciembre	1	4,2	4,2	12,5
	Febrero	2	8,3	8,3	20,8
	Marzo	4	16,7	16,7	37,5
	Abril	1	4,2	4,2	41,7
	Mayo	2	8,3	8,3	50,0
	Junio	4	16,7	16,7	66,7
	Julio	3	12,5	12,5	79,2
	Agosto	2	8,3	8,3	87,5
	Setiembre	3	12,5	12,5	100,0
	Total	24	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 9



Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

En el decurso del año 2016 el mes que registra mayor cantidad de ingreso de expedientes por infracciones Contra el Patrimonio es el mes de marzo registrando 4 casos que representan el 16.67%, al igual que el mes de junio.

- 4.14. ¿Cuál es la infracción que tiene mayor incidencia en los juzgados del Distrito Judicial de ventanilla durante el periodo 2016?**

Cuadro N° 10

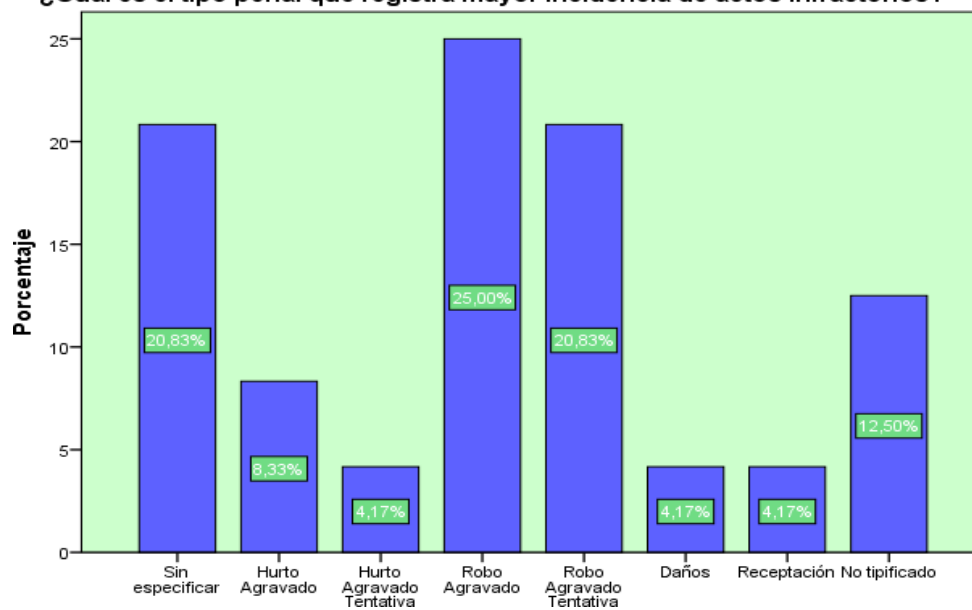
¿Cuál es el tipo penal que registra mayor incidencia de infracciones contra el patrimonio?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Sin especificar	5	20,8	20,8	20,8
	Hurto Agravado	2	8,3	8,3	29,2
	Hurto Agravado Tentativa	1	4,2	4,2	33,3
	Robo Agravado	6	25,0	25,0	58,3
	Robo Agravado Tentativa	5	20,8	20,8	79,2
	Daños	1	4,2	4,2	83,3
	Receptación	1	4,2	4,2	87,5
	No tipificado	3	12,5	12,5	100,0
	Total	24	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico N° 10

¿Cuál es el tipo penal que registra mayor incidencia de actos infractorios?



Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

La infracción que registra mayor incidencia en el Distrito de Ventanilla en el decurso del año 2016 es el robo agravado registrando 06 casos en el curso del año 2016 representando el 25% del total, seguido de robo agravado calificado en grado de tentativa con 05 casos que representan el 20.8%.

Cuadro N° 11

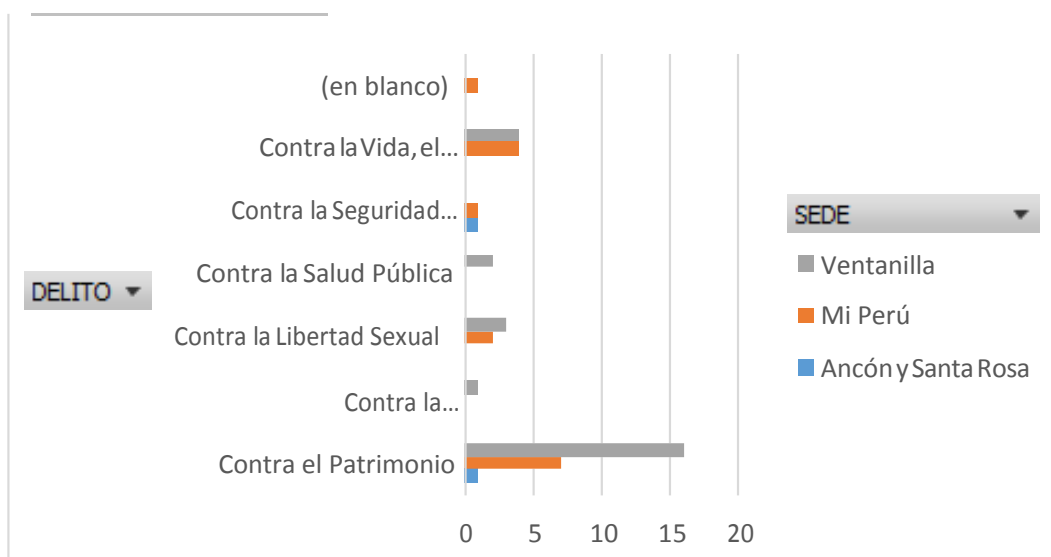
¿Qué infracciones tienen mayor incidencia en el D.J. Ventanilla durante el año 2016?

Etiquetas de fila	Ancón y Santa Rosa	Mi Perú	Ventanilla	Total general
Contra el Patrimonio	1	7	16	24
Contra la Administración Pública			1	1
Contra la Libertad Sexual		2	3	5
Contra la Salud Pública			2	2
Contra la Seguridad Pública	1	1		2
Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud		4	4	8
(en blanco)		1		1
Total general	2	15	26	43

Fuentes: Fichas de Investigación - Sistema Integrado Judicial SIJ Poder Judicial

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico N° 11



Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

Se puede verificar que los Juzgados de Ventanilla registran cuarenta y tres casos por actos infractorios a la ley penal en sus diversos tipos, del total se desagrega el siguiente orden en primer lugar se encuentran las infracciones que atentan Contra el Patrimonio registrando un total de veinticuatro casos, seguida de las infracciones Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud con ocho casos, en tercer lugar se encuentran las infracciones Contra la Libertad Sexual con cinco casos, en contraposición al registro de un 01 caso por infracción Contra la Administración Pública infracción ocurrida en el Juzgado de Ventanilla.

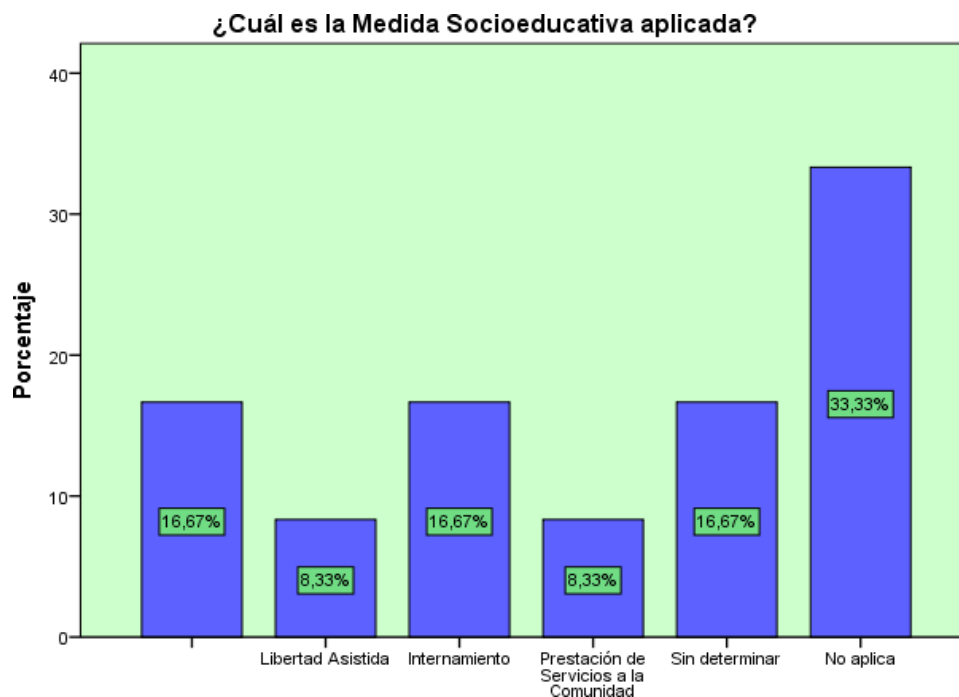
Cuadro N° 12

¿Cuál es la Medida Socioeducativa aplicada?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	4	16,7	16,7	16,7
Libertad Asistida	2	8,3	8,3	25,0
Internamiento	4	16,7	16,7	41,7
Prestación de Servicios a la Comunidad	2	8,3	8,3	50,0
Sin determinar	4	16,7	16,7	66,7
No aplica	8	33,3	33,3	100,0
Total	24	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico N° 12



Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

En el D.J. Ventanilla de la totalidad de expedientes que emitieron sentencia fundada – 08 casos, se evidencia que la medida socioeducativa con libertad asistida registra 02 casos representando el 8.33%, la medida socioeducativa que dispone el internamiento registra 04 caso representando 16.67% del total y la medida de prestación de servicios a la comunidad registra 02 casos representando el 8.33% del total.

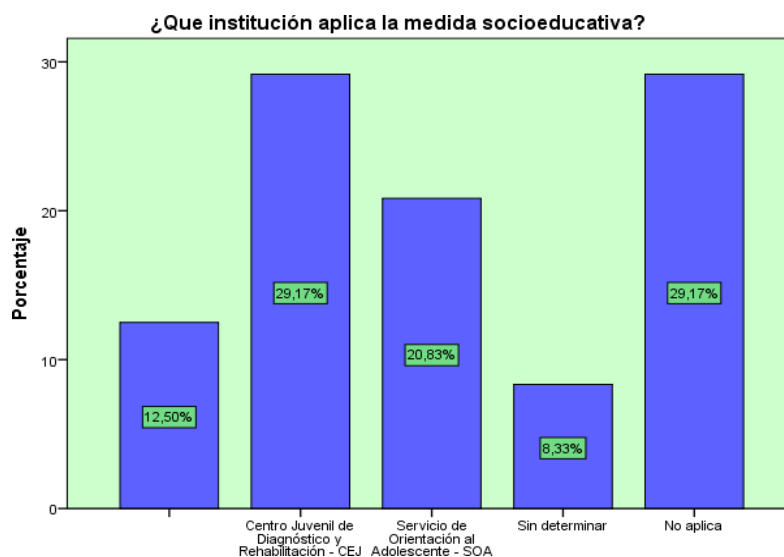
Cuadro N° 13

¿Qué institución aplica la medida socioeducativa?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	3	12,5	12,5	12,5
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación – CEJ	7	29,2	29,2	41,7
Servicio de Orientación al Adolescente – SOA	5	20,8	20,8	62,5
Sin determinar	2	8,3	8,3	70,8
No aplica	7	29,2	29,2	100,0
Total	24	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico N° 13



Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

El gráfico muestra que de la totalidad de resoluciones emitidas con sentencia condenatoria, 05 casos fueron atendidos por el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima recibiendo el adolescente infractor atención en medio cerrado (internamiento) y 04

casos fueron atendidos por el Servicio de Orientación al Adolescente SOA el menor infracción recibió atención en medio abierto.

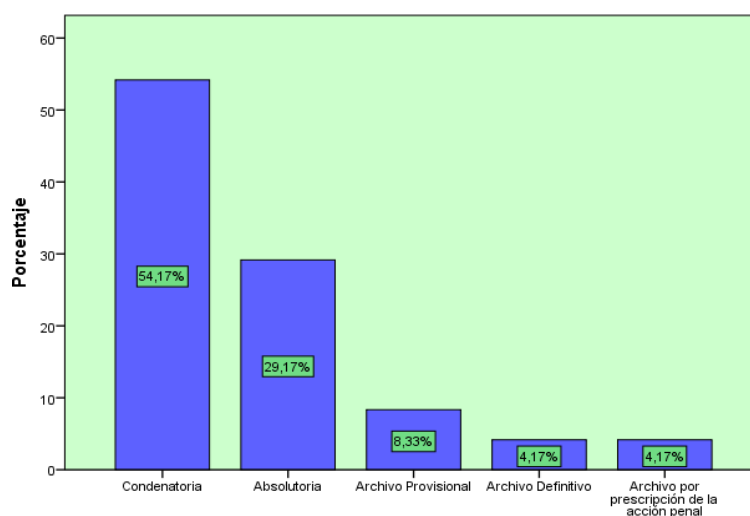
Cuadro N° 14

¿Cuál es el resultado de la resolución de sentencia de los expedientes?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido Condenatoria	13	54,2	54,2	54,2
Absolutoria	7	29,2	29,2	83,3
Archivo Provisional	2	8,3	8,3	91,7
Archivo Definitivo	1	4,2	4,2	95,8
Archivo por prescripción de la acción penal	1	4,2	4,2	100,0
Total	24	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico N° 14



Fuente: Elaboración Propia

Interpretación:

En el D.J. Ventanilla del total de 24 expedientes registrados por infracción contra el patrimonio, 13 registran resolución de sentencia condenatoria representando el 54.2% del total, en 07

casos se emitió sentencia absolutoria representando el 29.2%, 02 casos registran archivo provisional representando el 8.3% y 02 expedientes registran archivo definitivo.

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

421. HIPÓTESIS GENERAL:

La dogmática, doctrina, jurisprudencia, normativa nacional e internacional y la doctrina comparada en materia familia penal es fundamento para motivar la aplicación de la medida socioeducativa privativa de la libertad a los adolescentes infractores contra el patrimonio en el D.J. Ventanilla.

422. HIPÓTESIS ESPECÍFICA:

- a. La normativa que consideran los magistrados para fundamentar y motivar la media socioeducativa de internamiento a los adolescentes que incurren en actos infractorios a la ley penal en el Distrito durante el periodo 2016 es la es la Constitución Política del Perú, el Código Penal, Código de los Niños y Adolescentes, los modelos de justicia de menores, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing – Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, Las Directrices de Riad - Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, las Reglas de la Habana - Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad.**

La hipótesis específica número uno es confirmada parcialmente, la proposición enunciada corrobora que las resoluciones de sentencia emitidas por los magistrados

fueron motivados en base a la normativa nacional enunciada de forma expresa como es la Constitución Política del Perú Carta Fundamental que enuncia los derechos humanos como prioridad estatal, así también el Código Penal, el Código Procesal Penal, Código de los Niños y Adolescentes, así mismo la Convención sobre los Derechos del Niño; respecto a la normativa internacional citada en la hipótesis no se verifico su mención de forma expresa dentro de las resoluciones, pero es de suponer que los operadores de justicia con un alto grado de especialización en la materia los tienen presente al momento de determinar la situación jurídica de los menores que infraccionan la ley penal.

- b. Los requisitos para aplicar la medida socioeducativa de internamiento en el Distrito son que el acto infractor doloso este sancionado con pena privativa de la libertad mayor a cuatro años, que exista reiteración (reincidencia o habitualidad) en la consumación de infracciones graves, incumplimiento injustificado reiterado de la medida socio educativa impuesta y flagrancia delictiva.**

Se confirma parcialmente la hipótesis específica número dos, la proposición enunciada líneas arriba corrobora que dos de los requisito para la aplicación de la medida socioeducativa de internamiento por actos que infringen contra el Patrimonio registraron mayor ocurrencia, para su valoración se requirió que el acto infractor fuera sancionado con una pena privativa de la libertad superior a los cuatro años y la existencia de flagrancia en la perpetración de actos infractorios; respecto a los otros requisitos enunciados en la hipótesis específica no se evidencia una aplicación frecuente ya que no concurren los

supuestos en los casos analizados.

- c. La relevancia cuantitativa de las infracciones contra el patrimonio registrada en los Juzgados del Distrito durante el periodo 2016 es mayor en comparación a otros tipos penales.**

La hipótesis específica número tres es confirmada totalmente, en el D.J. Ventanilla en el recorren del periodo 2016 la perpetración de actos que infringen el patrimonio tienen mayor relevancia respecto a otros tipos penales, de los cuarenta y tres casos registrados por actos que infringen la Ley Penal son veinticuatro los casos formalizados por la comisión infracciones que atentan Contra el Patrimonio.

- d. La infracción contra el patrimonio que registra mayor incidencia en los juzgados del Distrito durante el periodo 2016 es el robo agravado.**

La hipótesis específica número cuatro es confirmada, la infracción por robo agravado registra mayor incidencia respecto a otros tipos penales, del total de expedientes se tiene 06 casos que representan el 25% del total, seguido del tipo penal por robo agravado calificado en grado de tentativa que registra un 20.8%

CAPITULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1.Contrastación de los resultados

El trabajo de investigación muestra resultados fiables los mismos que fueron obtenidos del procesamiento y estudio detallado de la información recopilada en la sede judicial de la Corte Superior del D.J. Ventanilla, es oportuno mencionar y registrar las limitaciones de tiempo y dominio metodológico que imposibilita que los resultados hallados lleguen a un cien por ciento de confiabilidad existiendo la posibilidad de error de forma o redacción de la información recopilada, respecto a la muestra utilizada es representativa del tipo de infracciones recurrentes en los Juzgados de Familia la misma que no representa la totalidad de casos registrados en el aparato de justicia, la hipótesis general planteada en la investigación fue confirmada parcialmente significando un aporte primario en materia familia penal la misma que puede servir de contraste para futuros trabajos de investigación evidenciando la existencia de abundante material relacionado al tema de adolescentes que infraccionan la ley penal en el D.J. Ventanilla; las hipótesis uno y dos fueron corroboradas en forma parcial, primero se validó la información registrada en las resoluciones de sentencia emitidas en el Distrito las que se fundamentan y motivan de forma expresa en la Carta Magna del Perú, El Código Penal CP., el CPP Código Procesal Penal y el CNA., así como la Convención respecto a los Derechos del Niño la normativa considerada para motivar la medida socio educativa privativa de la libertad aplicada a los adolescentes que consuman este tipo de infracciones concuerda con los principios y garantías proclamados en la normativa internacional; para el segundo caso se tiene de los expedientes revisados

que los requisitos para la aplicación de la medida socioeducativa privativa de la libertad - internamiento por actos que infraccionan el Patrimonio son la perpetración del acto infractor sancionado con una pena de privación de la libertad sobre los cuatro años y la existencia de flagrancia infractora, la muestra no evidencio el registro de casos por habitualidad y reincidencia tampoco por incumplimiento injustificado de la medida impuesta; las información revisada en las resoluciones de sentencia muestran que los Juzgados de Ventanilla brindan un trato diferenciado a los menores de edad que inciden en actos que infraccionan la Ley Penal, en tanto que en el desarrollo del procesamiento los operadores judiciales valoran los medios de prueba presentados en conjunto, ponderando la magnitud del daño causado, la gravedad de la infracción, la responsabilidad del menor y las necesidades de orden público, priorizando la edad, las circunstancias personales del menor, el Informe Multidisciplinario y la capacidad cognitiva del adolescente para entender la ilicitud de la infracción realizada, todo el examen y razonamiento que realiza el operador de justicia es plasmado, explicado y fundamentado en la resolución de sentencia; la hipótesis específica número tres y cuatro son confirmadas en su totalidad registrando en el D.J. Ventanilla que los actos que infringen el patrimonio tienen mayor relevancia e incidencia frente a otro tipo de infracciones siendo que de la totalidad existente - cuarenta y tres casos - veinticuatro corresponden al tipo penal materia de estudio, también se verifica que la infracción que registra mayor incidencia es el robo agravado representando el veinticinco por ciento del total, datos que podrían estar relacionados al nivel socio económico predominante en el Distrito y otros factores que influyen en la perpetración de la infracción que atenta contra el patrimonio. La información revisada muestra que el procedimiento empieza en la Comisaría del sector quienes dan a conocer la noticia infractora a la Fiscalía del Distrito ante la denuncia presentada se da inicio a la investigación previa evaluación de la posibilidad de aplicar la remisión fiscal dentro su jurisdicción en salvaguarda del bienestar e interés superior del adolescente, iniciado el procedimiento se recaban los medios de prueba que sustentan la formulación de denuncia

penal, es considerado fundamental la declaración del menor infractor es un medio de defensa e información y no un medio de prueba la misma que es valorada para superar la duda y llegar al convencimiento del acto infractor, la existencia de evidencia delictiva vinculado a una prueba directa que verifique la participación del menor, la formalización de denuncia está sustentada en medios de prueba idóneos que permiten acreditar los hechos imputados, de existir ausencia o insuficiencia probatoria el juez exige al fiscal que realice mayores actos de investigación promoviendo la prevención antes que la represión valorando las condiciones personales de los menores que infringen la ley y sus vínculos sociales con el objetivo de disminuir el efecto criminógeno del internamiento. La remisión judicial o fiscal es una forma alternativa de excluir del procesamiento al menor que realiza una infracción, acto procesal ampliamente difundido que es facultad discrecional del juez o fiscal en cualquier etapa del procedimiento, esta actividad es una alternativa preferente a las consecuencias perjudiciales que genera el procesamiento en el menor; una vez determinada la privación de la libertad del menor este es internado en el Centro de Rehabilitación Juvenil institución que está a cargo de dar cumplimiento a la medida socio educativa aplicada.

CONCLUSIONES

Primero:

En el D.J. Ventanilla las resoluciones de sentencia están fundamentadas y motivadas en base a la normativa nacional e internacional respecto al tema, considera los derechos fundamentales proclamados en la Ley Fundamental del Perú, el CNA., el título cinco del Código Penal respecto a los Delitos que atentan Contra el Patrimonio, el Código Procesal Penal de forma supletoria; el Perú ratificó una amplia lista de instrumentos internacionales las cuales emiten recomendaciones para garantizar los derechos fundamentales de los menores que infringieron la ley penal, el Interés Superior del Niño y Adolescente y la Convención sobre los Derechos del Niño aplicada por los operadores de justicia, la legislación nacional está sustentada en razones básicas de la política general estatal preventiva, atribuyendo responsabilidad penal por infracción la ley penal a partir de los catorce hasta los dieciocho años de edad.

Segundo:

En los Juzgados del Distrito de Ventanilla la medida socioeducativa que dispone la privación de la libertad es aplicada cuando la infracción dolosa es sancionada con una pena superior a los cuatro años, así también aplican el internamiento preventivo cuando es infracción flagrante. La resolución de sentencia enuncia el interés superior del niño, las circunstancias personales, sociales y los informes multidisciplinarios practicados al infractor, motivan la decisión adoptada, la medida socio educativa de internamiento es adoptada con un fin

educativo buscando la reinserción del menor dentro la sociedad. La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones graves es considerada como agravante al momento de realizar la valoración judicial y como atenuante la intención de reparar el daño causado, la restitución del bien a favor del agraviado o el pagar la reparación civil.

Tercero:

La investigación concluye que en el Distrito Judicial de Ventanilla las infracciones contra el patrimonio registran un alto porcentaje de incidencia respecto a otros tipos de infracciones veinticinco por ciento de la totalidad siendo el tipo penal de mayor incidencia, los informes multidisciplinarios evidencian que los adolescentes que incurrir en infracciones registran deserción escolar, disfuncionalidad y anomia familiar, carencia de protección y consideración en su entorno social, factores psicológicos que los hacen vulnerable en la etapa de la adolescencia que atraviesan.

Cuarto:

El robo agravado es el acto infractor que registra una mayor incidencia en los juzgados del D. J. de Ventanilla en el periodo 2016 en comparación a otros tipos penales, asimismo las resoluciones de sentencia condenatoria son más frecuentes que las absolutorias, el cumplimiento de la privación de la libertad está a cargo del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Lima otras medidas socio educativas se aplican en medio abierto a través del Servicio de Orientación al Adolescente, la aspiración estatal se encuentra reflejado el marco jurídico que garantiza el derecho de los menores infractores mediante la aplicación de un procedimiento justo con garantía de un juicio imparcial a cargo de la justicia especializada, pero la falta de asignación de recursos y logística para tal fin hacer que el avance sea progresivo.

RECOMENDACIONES

Primero:

Promover la integración y articulación de normativa sobre derechos del adolescente menor de edad, elaboración de políticas y programas con carácter comunitario con enfoque nacional a fin de prevenir actos infractorios de la ley penal, creación líneas de acción o programas de difusión de los derechos de los adolescentes menores de edad utilizando el entorno virtual o comunicación digital, reforzando la participación estatal en la transformación social, considerar el potencial que tienen los adolescentes y su capacidad de acción dentro de la sociedad, comprendiendo su desarrollo evolutivo y los posibles riesgos que lo rodea debiendo invertir en fortalecer sus capacidades para superar los problemas.

Segundo:

El Estado a través de la institución correspondiente debe asignar los recursos necesarios para el fomento y adopción de políticas públicas serias y efectivas, fomentando la participación e integración familiar como soporte de las personas en proceso de desarrollo encaminándolo a una vida responsable y a la formación de su propio juicio, la sociedad y la familia deben colaborar en el desarrollo y formación integro de los niños/as aplicando medidas preventivas para reducir los casos de riesgo, la problemática de sobrepoblación en los centros juveniles se intensifica incrementándose las condiciones de hacinamiento y en actos de

violencia hacia los adolescentes internados, menor cobertura de servicios básicos y riesgos de salubridad.

Tercero:

Los órganos jurisdiccionales deberían implementar los Equipos Multidisciplinarios existentes dotándolos de la logística necesaria y crear en las sedes donde sea necesario, el informe que emite debe tener una ponderación relevante y primordial, adoptar una guía procedimental sobre la aplicación de las medidas socioeducativas respecto de las acciones que adoptaron para lograr reinserir al adolescente infractor, los operadores de justicia podrían unificar e integrar la información y estadísticas en un sistema informático manteniendo la reserva y confidencialidad del caso, elaborar programas de sensibilización en la aplicación de la remisión judicial, la imposición privativa de la libertad al determinar el plazo que se ha imponer a los adolescentes considerará que los menores y adultos no tienen la misma percepción del tiempo por ello deberían priorizar la resolución de los procesos relacionados a persona menor de edad, dado que si es muy extenso genera perjuicio para el adolescente.

Cuarto.-

Dejar constancia en la resolución de la opinión que expresa el menor de edad respecto a su situación jurídica. Realizar campañas de sensibilización, prevención y difusión de los derechos de los niños/as y adolescentes. Respetar los plazos y el debido procedimiento en el desarrollo de investigación y juzgamiento. Gestionar la asignación de suficientes recursos humanos, financieros y técnicos para el desarrollo e implementación del sistema que provea de datos desglosados sobre la situación personal y jurídica de los menores que incurran en la comisión de actos infractorios a la ley penal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A. BIBLIOGRÁFICAS:

- Acevedo, Manuel (2013) *“Derecho Penal – Parte General” Segunda Edición* Lima, Perú. Editorial San Marcos.
- Bramont – Arias Torres, Luis A. (1994) *“Manual de Derecho Penal – Parte Especial”. Primera Edición.* Lima – Perú. Editorial San Marcos,
- Bravo Gamarra Daysi E. (2014) *“El adolescente infractor en el Perú - ¿mínima Intervención, Máximas garantías?”.* Lima – Perú. Jurista Editores.
- Carbonell Lazo, Fernando R. (2010) *“Manual de Derecho de los Niños y Adolescentes”.* Lima Perú. Ediciones Jurídicas.
- Chanamé Orbe, Raúl (2012) *“Diccionario Jurídico Moderno” Octava Edición,* Lima – Perú. Editorial ADRUS.
- Chunga Lamonja Fermín, Chunga Chávez Lucía, Chunga Chávez Carmen (2016) *“Comentarios al Código de los Niños y Adolescentes – La Infracción Penal y los Derechos Humanos”.* Lima – Perú. Grijley.
- De Orbegoso Rusell, Carmela (2017) *“Responsabilidad Penal de los Adolescentes en el Sistema Jurídico Penal Peruano”.* Lima – Perú. Editorial Navarrete.
- Fermín G. Chunga Lamonja, Lucía Chunga Chávez, Carmen Chunga Chávez (2016) *“Comentarios al Código de los Niños y Adolescentes – Infracción Penal y los Derechos Humanos” Primera edición.* Lima

Perú, Editorial GRIJLEY.

- García Huayama, Juan Carlos, Solar Villalta Ana María, Solar Villalta Jastmc, Merino Guerrero Nadeira, Alvarado Reyes María Elvira Del Rosario, Alvarado Reyes Juana Elvira, Hernández Alarcón Christian (2016) *“Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú”*. Lima – Perú. Lex & Iuris Grupo Editorial.
- García Huayama Juan Carlos y Alvarado Reyes Juana Elvira (2014) *“El Internamiento Preventivo en el Sistema Penal Juvenil Peruano”*. Lima – Perú. Lex & Iuris Grupo Editorial.
- Gómez Mendoza Gonzalo G. (2013) *“Delincuencia Juvenil”*. Lima – Perú. Ediciones Normas Jurídicas.
- Palacios Vilela Jesús Josefa, Romero Delgado Hugo Eusebio y Ñaupas Paitan Humberto Primera Reimpresión (Agosto 2018) *“Metodología de la Investigación Jurídica – Una Brújula para Investigar en las Ciencias Jurídicas y Redactar una Tesis”* Editorial GRIJLEY.
- Peña Cabrera Freyre, Alonso R. (2014) *“Derecho Penal – Parte Especial”*. Segunda Edición Tomo II, Lima – Perú. Editorial IDEMSA.
- Rodríguez Espinoza, Carlos A. (2013) *“Manual de Derecho Penal – Parte Especial I”*. Tercera Reimpresión. Lima – Perú. Ediciones Jurídicas.

B. HEMEROGRÁFICAS:

- Barletta Villarán, María Consuelo, COMETA – Compromiso desde la Infancia y Adolescencia, OPA – Observatorio de Prisiones Arequipa (2016-2017) *“La Justicia Pernal Juvenil en el Perú: Un aporte para la construcción de un sistema penal garantista y de reinserción sociofamiliar”*.

- Derecho & Sociedad Asociación Civil (diciembre 2012) “*Revista Pólemos*” Año III, Número 6, Lima.
- Gerencia de los Centros Juveniles Poder Judicial Del Perú - Oficina de imagen Institucional y Estadística (2017) “*Informe Estadístico 2017*”.
- Horst Schonbohm - Poder judicial del Perú – Consejo Nacional de la Magistratura – Cooperación Alemana “*Manual de Sentencias Penales Aspecto Generales de Estructura, Argumentación y Valoración Probatoria – Reflexiones y Sugerencias*”-
 - Ministerio De Justicia y Derechos Humanos – INDAGA Consejo Nacional de Política Criminal - Observatorio Nacional de Política Criminal (2017) “*Adolescentes Infractores*” Boletín IV. Segunda Edición.
- Ministerio Público “*Boletín Estadístico*”, diciembre 2017.
- Observatorio Nacional De Política Criminal Del Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos - Programa Conjunto De Las Naciones Unidas Para La Seguridad Humana (febrero del 2017) “*Justicia Juvenil Diferenciada - Hacia una atención con mayores oportunidades para adolescentes en conflicto con la ley penal*” Primera edición.

C. ELECTRÓNICAS:

- Barletta Villaran, M.C. “Actos de Contravención e Infracción a la Ley Penal”. <https://es.scribd.com/document/346087243/Actos-de-Contravencion>
- Bidart-Campos, Germán, Teoría General de los Derechos Humanos. Universidad Autónoma de México, 1993. <http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n25/n25a1.pdf>
- Bidart Campos (1999) “*El Interés Superior del Niño y la Protección Integral de la Familia como Principios Constitucionales (la*

adopción de un menor por cónyuges separados)” La Ley 1999

– F 623. <http://www.corteidh.or.cr/tablas/29556.pdf>

- Cillero Bruñol, M. “El Interés Superior del Niño en el Marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”
<https://www.escri-net.org/es/docs/i/408745>
- Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Poder Judicial Escuela Judicial Voluntarios de Naciones Unidas (2001) “Derechos de la Niñez y la Adolescencia Antología”
https://www.unicef.org/costarica/docs/cr_pub_Antologia_derechos_NNA_Escuela_Judicial.pdf
- Comité de los Derechos del Niño - Observación General N° 10 “Los Derechos del Niño en la Justicia de Menores”
<https://www.right-to-education.org/es/resource/crc-observacion-general-10-los-derechos-del-ni-o-en-la-justicia-de-menores>
- Comité de los Derechos del Niño - Observación General N° 14 sobre el *derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial.*
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=3990
- Comité de los Derechos del Niño (2016) “*Observaciones Finales sobre los Informes Periódicos Cuarto y Quinto Combinados del Perú*”
http://www.observaciones_finales_del_Comite_de_los_Derechos_del_Nino_al_Estado_Peruano.pdf
- Dialnet - Fernández Espinoza, W. (2017) “La Autonomía Progresiva del Niño y su Participación en el Proceso Judicial”
<file:///C:/Users/COMPAQ/Downloads/Dialnet-LaAutonomiaProgresivaDelNinoYSuParticipacionEnElPr-6222545.pdf>
- Diario El Comercio (06/02/2017) Ana Briceño “*Gringasho*” sale libre este año: crece 11% delincuencia juvenil.
<https://elcomercio.pe/archivo/todas/2017-02-06>

- Directrices de RIAD (1990)
<https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/preventionofjuveniledelinquency.aspx>
- Fernández, A. (2013). *Tratamiento jurisdiccional y aplicación de medidas socio educativas a menores infractores de la ley penal*. Tesis para optar al Grado Académico de Magister en Derecho Penal Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.
<http://repositorio.uancv.edu.pe/bitstream/handle/UANCV/726/TESIS%20DNI%20N%C2%BA%2002434720.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- García Méndez, E. “Adolescentes y Responsabilidad Penal: Un Debate Latinoamericano”.
http://23118.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/practicas_de_investigacion/775/textos_y_articulos/Adolescentes_responsabilidad_penal_Garcia_Mendez.pdf
- García Méndez, E. “Infancia, Ley y Democracia: Una Cuestión de Justicia”.http://iin.oea.org/Cursos_a_distancia/infancia_ley_y_democracia.pdf
- Gerencia de Seguridad Distrito de Ventanilla (2017) “*Plan Local de Seguridad Ciudadana*”
http://www.municallao.gob.pe/pdf/seguridad-ciudadana/meta/PLAN%20LOCAL%20ENERO2017/PLAN%20LOCAL%20SEGURIDAD%20CIUDADANA_ENERO2017.pdf
- Grossman, C. UNESCO 2003 *Cátedra sobre el Interés Superior en Derechos Humanos en América Latina y El Caribe*.
<https://catedraunescohdh.unam.mx/catedra/catedradh2007/Eventos/Documentos/EducacionSuperiorDH-AmericaLatina.pdf>
- Horst Schonbohm, Poder judicial del Perú – Consejo Nacional de la Magistratura – Cooperación Alemana. (2018) “*Manual de Sentencias Penales Aspecto Generales de Estructura, Argumentación y Valoración Probatoria – reflexiones y*

Sugerencias

<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/bb61920047a0dcfcbaa-bbfd87f5ca43e/MANUAL+DE+FUNDAMENTACION+DE+SENTENCIAS+PENALES.pdf?MOD=AJPERES>

- Ibarlucía, Emilio A. (2000) La Ley 2000-F 761. *La Impugnación de Paternidad por el Padre “Reconociente”. A la Luz de los Nuevos Paradigmas Constitucionales de la “Identidad Biológica” y el “Interés Superior del Niño”*.
<https://pdfs.semanticscholar.org/736a/b2a9952abe3de07087faff499840227ad140.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI “*Principales Indicadores Series Nacionales*” <https://www.inei.gob.pe/bases-de-datos/>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2016)
“*Crecimiento Económico, Población, Características Sociales y Seguridad Ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao*”.
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1339/index.html
- Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI *Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito 2000-2015*.
<https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/publicaciones-digitales/>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2018)
“*Adolescentes que no estudian ni trabajan y su condición de vulnerabilidad*”.<https://www.inei.gob.pe/biblioteca.virtual/publicaciones-digitales/>
- Lacrampette, N. (2010). *Responsabilidad Penal Juvenil, Exclusión y Democracia. Tesis para optar al Título Profesional Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales*, Universidad de Chile.
<http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/107084>

- Miguel CILLERO BRUÑOL – OEA. *El Interés Superior del Niño en el Marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño*. http://www.iin.oea.org/IIN/cad/Participacion/pdf/el_interes_superior.pdf
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables “Código de los Niños y Adolescentes”
https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgnna/Codigo_Ninos_Adolescentes.pdf
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Lima 2013 “*Compilación de Jurisprudencia en Justicia Penal Juvenil*”
<https://www.minjus.gob.pe/wpcontent/uploads/2013/12/Compilaci%C3%B3n-de-Jurisprudencia-en-Justicia-Penal-Juvenil.pdf>
- Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño – La Convención sobre los Derechos del Niño
<http://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/observaciones-generales-comite-derechos-del-nino/>
- Observatorio Nacional De Política Criminal Del Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos - Programa Conjunto De Las Naciones Unidas Para La Seguridad Humana (febrero del 2017) “*Justicia Juvenil Diferenciada - Hacia una atención con mayores oportunidades para adolescentes en conflicto con la ley penal*” Primera edición.
https://indaga.minjus.gob.pe/sites/default/files/JusticiaJuvenilDiferenciada_ONPC_NNUU_.pdf
- Otto, Grundkurs Strafrecht. Die einzelnen Delikte, dritte Auflage, “*Los Delitos individuales*” Tercera edición, Walter de Gruyter Verlag, Berlin/ New York (1991)
<https://studylib.es/doc/7240756/salamanca-2010---gredos---universidad-de-salamanca>
- Palomino, J. (2017). *Tratamiento de los menores que perpetran infracciones contra la ley penal en el distrito de Chanchamayo – Junín 2014 - 2015*. Tesis para optar al Título Profesional de

Abogado - Universidad de Huánuco.
<https://udh.edu.pe/repositorio>

- Peralta, F. & Mogollón, M. (2016). *La aplicación de medidas socio-educativas de infracción de 6 a 10 años para los menores infractores de la ley penal*. Tesis para optar al Título Profesional de Abogado Universidad Andina del Cusco, http://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/UAC/645/3/Franclin_Mar%C3%ADDa_Tesis_bachiller_2016.pdf
- Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia
http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/cij/documentos/PlenoNacFamilia_170310.pdf
- Presidencia del Consejo de Ministros - La Constitución Política del Perú (1993). <http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Constitucion-Pol%C3%ADtica-del-Peru-1993.pdf>
- Real Academia Española (2018) “*Diccionario de la Lengua Española*”
<https://dle.rae.es/>
- Reglas de la Habana.
<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1423.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/1423>
- Revista Pólemos – Derecho & Sociedad Asociación Civil (2012) “Responsabilidad Penal de los Menores de Edad”.
<http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/2013/02/17/polemos-no-6-responsabilidad-penal-de-los-menores-de-edad/>
- Sentencia Plenaria N°01-2005/DJ-301-A, las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República.
https://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/cij/documentos/Pleno_Jurisdiccional_Penal_Supremo_2005.pdf
- UNICEF México (2014) “*Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño*”.
<http://www.UNICEF.observacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf>

- Universidad San Martín de Porres Facultad de Derecho Centro de Investigación de Derecho Penal - Villavicencio Terreros, Felipe (2014) "Sistema de Control de la Infracción Penal por Parte de Adolescentes en el Perú"
<http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/2508/1/villavicencio>

ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO: APLICACIÓN DE LA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD A LOS ADOLESCENTES INFRACTORES EN LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE VENTANILLA - 2016

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLE E INDICADORES	METODOLOGIA	POBLACION Y MUESTRA
<p><u>Problema General</u></p> <p>¿Cuáles son las causas para determinan la aplicación de la medida socio educativo privativo de la libertad a los adolescentes infractores contra el patrimonio? Caso concreto del Distrito Judicial de Ventanilla en el año 2016.</p> <p><u>Problemas Específicos</u></p> <p>PE 1: ¿Cuáles son las normas que utilizan los magistrados para fundamentar y motivar la medida socio educativa de internamiento?</p> <p>PE 2: ¿Cuáles son los requisitos para aplicar la medida socioeducativa de internamiento?</p> <p>PE 3: ¿Cuál es la relevancia cuantitativa de las infracciones contra el patrimonio en los juzgados del Distrito durante el periodo 2016?</p> <p>PE 4: ¿Cuál es la infracción que tiene mayor incidencia en los juzgados del Distrito durante el periodo 2016?</p>	<p><u>Objetivo General</u></p> <p>Determinar las causas para aplicar la medida socio educativa privativa de la libertad a los adolescentes infractores contra el patrimonio en el Distrito Judicial de Ventanilla durante el año 2016.</p> <p><u>Objetivos Específicos</u></p> <p>OE 1: Identificar la normativa de aplicación frecuente para fundamentar y motivar la media socioeducativa de internamiento a los adolescentes que infringen la ley penal en el Distrito durante el periodo 2016.</p> <p>OE 2: Precisar los requisitos para aplicar la medida socioeducativa de internamiento en el Distrito.</p> <p>OE 3: Señalar la relevancia cuantitativa de las infracciones contra el patrimonio registrados en los juzgados del Distrito durante el periodo 2016.</p> <p>OE 4: Indicar la infracción contra el patrimonio que registra mayor incidencia en los juzgados del Distrito durante el periodo 2016.</p>	<p><u>Hipótesis General</u></p> <p>La medida socio educativa privativa de la libertad aplicada a los adolescentes infractores contra el patrimonio en el Distrito Judicial de Ventanilla tiene como fundamento la dogmática, doctrina, jurisprudencia, normativa nacional e internacional sobre la materia y la doctrina comparada.</p> <p><u>Hipótesis Específica</u></p> <p>HE 1: La normativa que consideran los magistrados para fundamentar y motivar la media socioeducativa de internamiento a los adolescentes que infringen la ley penal en el Distrito durante el periodo 2016 es la es la Constitución Política del Perú, El Código Penal, Código de los Niños y Adolescentes, los modelos de justicia de menores, la Convención sobre los Derechos del Niño, Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores – Reglas De Beijing, Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil – Directrices de Riad, Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad – Reglas de la Habana.</p> <p>HE 2: Los requisitos para aplicar la medida socioeducativa de internamiento en el Distrito son que el acto infractor doloso este sancionado con pena privativa de la libertad mayor a cuatro años, que exista reiteración (reincidencia o habitualidad) en la consumación de infracciones graves, incumplimiento injustificado reiterado de la medida socio educativa impuesta y flagrancia delictiva.</p> <p>HE 3: La relevancia cuantitativa de las infracciones contra el patrimonio registrada en los juzgados del Distrito durante el periodo 2016 es mayor en comparación a otros tipos penales.</p> <p>HE 4: EL robo agravado es la infracción contra el patrimonio que registra mayor incidencia en los juzgados del Distrito durante el periodo 2016.</p>	<p><u>Variable Independiente</u></p> <p>X: Los adolescentes infractores en los delitos contra el patrimonio.</p> <p><u>Dimensiones</u></p> <p>X1: Tratarse de un acto infractor doloso sancionado con una pena superior a los cuatro años.</p> <p>X2: Circunstancia agravante de la infracción, Reiteración en la comisión de infracciones graves.</p> <p>X3: Incumplimiento injustificado y reiterado de la medida socioeducativa impuesta.</p> <p>X4: Flagrancia en las infracciones contra el patrimonio.</p> <p><u>Variable Dependiente</u></p> <p>Y: La Medida socioeducativa privativa de la libertad</p> <p><u>Dimensiones</u></p> <p>Y1: Sanción aplicable regulada en el Código de los Niños y Adolescentes.</p> <p>Y2: Estructura del tipo penal regulación en el Código Penal y Procesal Penal.</p> <p>Y3: Regulación en normas internacionales conexas.</p> <p>Y4: Regulación Jurisprudencial sobre la materia.</p>	<p><u>Tipo de Investigación</u></p> <p>Aplicada</p> <p><u>Enfoque</u></p> <p>Cualitativo.</p> <p><u>Nivel de Investigación</u></p> <p>Descriptivo</p> <p><u>Método</u></p> <p>Estudio de casos</p> <p><u>Diseño</u></p> <p>No experimental</p>	<p><u>Población</u></p> <p>Comprende la totalidad de sentencias emitidas en el Distrito por Infracción a la ley penal durante el año 2016, en los procesos iniciados por la comisión de delitos contra el patrimonio por parte de adolescentes infractores, que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión.</p> <p><u>Muestra</u></p> <p>No se calculó tamaño de muestra ya que toda la población de estudio formó parte de la muestra.</p> <p><u>Técnicas e Instrumentos</u></p> <p><u>Técnicas</u></p> <p>Análisis documental Análisis cualitativo de datos. Ficha.</p> <p><u>Instrumentos</u></p> <p>Análisis de contenido. Estudio de caso.</p>

FICHA DE INVESTIGACIÓN APLICACIÓN DE LA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD A LOS ADOLESCENTES INFRACTORES EN LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE VENTANILLA - 2016	
Autor o institución generadora del documento :	
N° de Resolución :	
N° de Expediente :	
Nombre del archivo y su ubicación física :	
Página o páginas del documento consultadas :	
Sentencia :	
Normativa aplicada a la medida socioeducativa privativa de libertad a los adolescentes infractores en los delitos contra el patrimonio	<p>A. Tratarse de un acto infractor doloso sancionado con pena mayor a 4 años</p> <p style="text-align: center;">SI () NO ()</p> <p>B. Reiteración en la perpetración de infracciones graves</p> <p style="text-align: center;">SI () NO ()</p> <p>C. Incumplimiento injustificado reiterado de la medida socioeducativa impuesta.</p> <p style="text-align: center;">SI () NO ()</p> <p>D. Flagrancia en las infracciones contra el patrimonio.</p> <p style="text-align: center;">SI () NO ()</p>
Otra normativa aplicable a la medida socioeducativa privativa de libertad a los adolescentes infractores en los delitos contra el patrimonio	<p>A. Sanción aplicable regulada en el Código de los Niños y Adolescentes.</p> <p>B. Estructura del tipo penal regulación en el Código Penal y Procesal Penal.</p> <p>C. Regulación en normas internacionales conexas.</p> <p>D. Regulación Jurisprudencial sobre la materia.</p>